REVISTA DE CULTURA POLÍTICA
DEL FRENTE DE GUERRA ORIENTAL
COMANDANTE EN JEFE MANUEL VÁSQUEZ CASTAÑO
DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL. E.L.N.
Primer Semestre de 2025 Año 17. No. 17
Montañas, selvas y sabanas del Oriente Colombiano

ORIENTESE

ORIENTESE

Revista de Cultura Política del
Frente de Guerra Oriental
Comandante en Jefe
Manuel Vásquez Castaño
del Ejército de Liberación Nacional.
ELN. Colombia.

No. 17 Año 17
Primer Semestre 2025

Directores:
M.P.M.E. del F.G.O.

Consejo Editorial, en Memoria:
Domingo Laín Sánz
Efraín Pabón Pabón
José David Suárez
Adonay Ardila Pinilla
Compañero Diego
Compañera Nubia
Compañera Estrella
Compañero Pomares
José Alfredo Arriguí
Pedro Arturo Téllez
José Daniel Pérez

Diseño y diagramación:
Colectivo Hombre Nuevo

Edición Impresa:
Ediciones-Venceremos

Distribución
Sistema Patria Libre

Página Internet:
www.fgoriental.org
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org

Emisora
Voz de la Libertad, 95.5 fm stereo

Hecho en las montañas, selvas y
sabanas del Oriente Colombiano.

Se autoriza la reproducción total o
parcial citando su fuente.

Sumario

Editorial:.....3

Identidad: Las nuevas formas de la contrainsurgencia en Colombia 5

Nación: La vía de la reforma está agotada: ¡VIVA LA REVOLUCIÓN.....7

Movimiento Social: El movimiento popular colombiano en el marco del teatro electoral**.....10**

Movimiento Social: Permanencia de la lucha popular.....14

Mundo: IA y transformaciones recientes en el campo de la guerra..... .17

Mundo: Disputa interimperialista y salida proletaria.....21

Mundo: Mundo en imágenes 24-25

América Latina: Odio y guerra contra el proletariado...26

Ambiente: La COP16: salvar el planeta no es negocio.....29

Ciudad: La ciudad improductiva de la burguesía criolla33

Región: Paros y bloqueos de vías como arma política de la ultra derecha.....36

Cultura: Patrimonio cultural 39

Los guerrilleros entonan el himno del Ejército de Liberación Nacional.

El plan contrainsurgente, hoy en su máxima expresión, tiene un propósito claro por el Estado y el Gobierno, el aniquilamiento del Ejército de Liberación Nacional. El pueblo colombiano en regiones como el Pacífico: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, de igual forma en Boyacá, Casanare, Arauca, o en el Catatumbo y Norte de Santander, es víctima del contubernio entre el establecimiento con las exFarc y los mercenarios narcoparamilitares. Nueva estrategia que renueva el otrora paramilitarismo para lanzarlo ya no solo contra el movimiento social y la insurgencia armada, sino también contra demócratas y revolucionarios de otros países, ejemplo de ello, el magnicidio del presidente de Haití y el asedio contra Venezuela, entre otros.

Entre tanto, en el Magdalena Medio, Bajo Cauca, Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño el pueblo continúa soportando las hostilidades del paramilitarismo tradicional. En el Catatumbo Nortesantandereano se revive y desata una confrontación en la cual los revolucionarios auténticos nos vimos en la obligación de actuar en contra del reciclaje contra-insurgente hecho en medio de la "Paz Total" con el EPL, exFarc y disidencias.

Los dolientes de las huestes contrarevolucionarias en el gobierno, en cabeza de Petro y los sectores oligárquicos, salieron lanza en ristre contra el ELN, bajo una sarta de mentiras cuando en realidad nos enfrentan por ser un proyecto inclaudicable nacido en Simacota hace 60 años. En medio de su profunda crisis de gobernabilidad, que no ha sido zanjada ni por la ultraderecha ni por el progresismo, el régimen oligárquico y proimperialista esconde sus profundos problemas construyendo el imaginario de un enemigo público como responsable. Tontería a la cual se suman aliados e ilusos funcionales al poder burgués.

El ELN lucha por el socialismo, la soberanía nacional y territorial, contra el neocolonialismo, imperialismo y capitalismo. Aunque en la Organización han participado revolucionarios internacionalistas como el Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez, cura español y otros, el ELN no tiene deuda ni ha sido financiado, menos conducido, por ningún país o tercero. Porque somos revolucionarios nos autodeterminamos en las decisiones, propósitos, políticas y en lo programático.

Con el Gobierno de Uribe se vivió la institucionalización del paramilitarismo clásico y la tiranía narcoterrateniente; con Santos prosperó la derrota del proyecto revolucionario fariano, fortaleciéndose el plan contrainsurgente al negarse el conflicto social, político y armado, y por sobre todo la lucha de clases que le da origen y sustenta la naturaleza política de la insurgencia popular y armada. Duque afianzó la tiranía de la ultraderecha que en el ejercicio del poder se alineó con el

imperialismo norteamericano siendo incondicional en su papel como cabeza de playa contra América Latina. Hoy Petro con la retórica progresista enajena y destroza la esperanza del pueblo en la soberanía y la democracia popular, pilares fundamentales para alcanzar cambios estructurales en el Estado y la sociedad, congratulándose con el Bloque Dominante y negando al Bloque Popular y Revolucionario.

La Paz Total de Petro es la síntesis de los propósitos oligárquicos burgueses y plan contrainsurgente proimperialista, que fueron desarrollando sus antecesores, convirtiendo a las víctimas en victimarios del pueblo. Para ello defiende la democracia burguesa, la libertad individual, la paz para la acumulación capitalista, todo ello en nombre de la clase popular y el proletariado. Ironía y cinismo, los victimarios del pueblo hoy convertidos en mesías y salvadores supremos, cuando en realidad son una vergüenza nacional y hacen parte de un contubernio criminal donde verdugos, psicópatas, narcotraficantes, mercenarios, bandidos y corruptos de cuello blanco pertenecen a la misma calaña, que pretende deslegitimar la acción revolucionaria del ELN.

!Cómo les duele! que, aunque todos estén contra el ELN, no hayan podido evitar los éxitos de la acción revolucionaria y operacional de nuestro heroico Ejército de Liberación Nacional. No podrán restar méritos a las acciones contundentes contra los mercenarios narcoparamilitares y bandas exFarc en Arauca, Catatumbo y en otras regiones de Colombia. Menos aún podrán ganar terreno responsabilizando al ELN de los males contra el pueblo, la verdad es otra. Estamos derrotando a los verdaderos verdugos del pueblo, el contubernio criminal y la mentira, guerra sucia y terrorismo del Estado Burgués.

Aunque se intente mostrar al ELN como el enemigo público número uno y causante de la guerra en el país, la realidad demuestra con creces que esto no es más que una pretensión de ocultar la profunda crisis social y las verdaderas causas que la originaron y contra las cuales continuamos luchando y avanzando. Y por eso a cada paso que avanza el ***ELN decimos:***

¡Fuera burgueses!

¡Fuera narcos y mercenarios!

¡Fuera paracos!

¡Viva la revolución y que viva el socialismo!

¡Colombia para los trabajadores,
Ni un paso atrás Liberación o Muerte!

¡ Ni rendición ni entrega,
Siempre junto al pueblo!

Mando Político Militar Estratégico
Frente de Guerra Oriental
Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño
Ejército de Liberación Nacional ELN
Marzo 2025

LAS NUEVAS FORMAS DE LA CONTRAINSURGENCIA EN COLOMBIA

En lo que se ha conocido como el "conflicto armado", se presentan hoy nuevas realidades en el componente paramilitar y también en varias de las formas que asume la política y los planes contra-insurgentes, implementadas desde hace 60 años por la clase dominante, el Estado Colombiano y sus fuerzas armadas, bajo la conducción de los Estados Unidos.

El viejo paramilitarismo, el de las AUC, de las décadas del 80, 90 y parte de la primera del 2.000, se ha prolongado principalmente a través del Clan del Golfo, organización dedicada desde los viejos tiempos al negocio del narcotráfico, la exportación de la droga y la captura de otras rentas ilícitas, una de ellas la originada con el paso de los migrantes por el Tapón del Darién.

Además, de esa expresión del viejo paramiliarismo y la contrainsurgencia, arraigadas en la médula del Estado colombiano y las fuerzas armadas, tenemos ahora, otras expresiones paramilitares que se lucran del gran negocio del narcotráfico, de otras rentas y se presentan bajo el ropaje de fuerzas guerrilleras y disidencias de Farc.

Son grupos que se originan después del acuerdo de desarme y desmovilización del 2016, en el gobierno de Santos. Se reclaman continuadores del proyecto de las FARC, pero se dedican principalmente al negocio del narcotráfico, se han articulado en varias de las regiones con las fuerzas militares y los planes de contrainsurgentes del Estado Colombiano.

Las llamadas disidencias

Fueron surgiendo desde el 2016 en distintas partes del país, estableciendo posteriormente dos coordinaciones o agrupaciones nacionales: el llamado Estado Mayor Central de las Farc, en cabeza de Iván Lozada o Mordisco y la segunda Marquetalia, en cabeza de Iván Marques, fue allí donde estuvieron Santrich, el Paisa y Romaña.

Recientemente, esas dos agrupamientos o espacios de coordinación se han divido, el primero, o sea el Estado Mayor Central, ha dado lugar al "Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF)", donde se aglutinaron grupos del Sur del país, bajo el mando de Calarcá y el llamado frente 33 del Catatumbo.

La segunda Marquetalia, también se dividió hace poco, el sector escindido, lo conforman los llamados "Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico", asumiendo el nombre de Coordinadora Guerrillera Ejercito Bolivariano, es el sector encabezado por Walter Mendoza, al que pertenece Araña, uno de los delegados a la Mesa de negociaciones de ese sector con el gobierno, quien a pesar de tener levantadas las órdenes de captura, fue detenido por la Fiscalía a mediados de febrero, por una orden de extradición de los Estados Unidos.

Vinculación al negocio y actuación contrainsurgente en los territorios

En la actualidad, esos grupos tienen como sus actividades principales, el negocio del narcotráfico y la captura de rentas ilícitas, no tienen relación con las dinámicas de la lucha social, están ausentes de la agitación política y de las tareas tendientes hacia la organización popular, desarrollan relaciones con el ejército y la policía, compran a sus mandos en las regiones, se articulan a la política contra insurgente del Estado colombiano y en ese contexto actúan contra el ELN y son protegidos por las fuerzas militares en varias regiones del país: Cauca, Valle, Nariño, Arauca y el Catatumbo .

En el Chocó, el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el Sur de Bolívar, es el Clan del Golfo quien se enfrenta al ELN en el marco de la contrainsurgencia, en coordinación y bajo la protección y amparo de las fuerzas armadas del Estado, tal como ha sido denunciado por las comunidades de esas regiones y organizaciones de derechos humanos. Esas denuncias también se presentaron en el 2023, en Barranca, a una delegación de la Mesa de Diálogos Gobierno-ELN, incluyendo la ONU, la Iglesia y delegados de los países garantes y acompañantes.

En Arauca, un grupo grande encabezado por Arturo Paz, que se presentó como disidencias de Farc en el 2021, se posicionó inicialmente en la frontera colombo venezolana, intentando montar allí una cabeza de playa para el despliegue de fuerzas invasoras contra el gobierno venezolano, buscando igualmente doblegar al ELN y sacarlo de ese territorio, siendo derrotadas en ese intento.

Posteriormente en el 2022, sus reductos, en cabeza de Antonio Medina, desertor de las antiguas FARC, activaron una bomba de gran poder explosivo contra el edificio sede de las organizaciones sociales del Departamento. Hoy, esos reductos, bajo la jefatura de Medina y Héctor Aguilar, conocido como Pescado, son protegidas por el Ejercito y confrontan al ELN y a los liderazgos sociales de la región.

En el sur del país, en los departamentos del Cauca y Valle, las disidencias agrupadas en la Carlos Patiño, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez actúan contra el ELN y también contra los indígenas, agrupados en la ACIN y el CRIC. En el gobierno de Duque, el Ejercito les entregó el Plateado y el Cañón del Micay, combatiendo al ELN.

El posicionamiento que estos grupos han logrado del Pacifico Sur, les facilita la exportación de grandes cantidades de droga, en una región dedicada al cultivo de la coca, compartiendo sus ganancias con los mandos militares que llegan a la región, lo que crea una activa cooperación entre unos y otros, neutralizando así cualquier directiva que busque sacar esas disidencias del Cañón del Micay y del negocio.

La última y más reciente escena de esta película es lo que acaba de presentarse en el Catatumbo, en enero de este 2025. La gran prensa, el gobierno y los militares, distorsionando la realidad, mostraron estos hechos como una agresión del ELN a la población civil y no como el enfrentamiento a otra fuerza armada protegida por el ejército estatal en la región, silenciaron las conductas del llamado Frente 33 contra la población y su autoría en el asesinato de una pareja y su bebé de 10 meses, el 15 de enero en carreteras de Tibú, han callado igualmente la dedicación del 33 al negocio del narcotráfico y sus comportamientos.

LA VÍA DE LA REFORMA ESTÁ AGOTADA
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

Cierre de la alternativa progresista y crisis del régimen de gobierno

La crisis del régimen de dominación del capital se vuelve a expresar en el fracaso del régimen de gobierno que el progresismo planteó como salida a la larga crisis de acumulación del capitalismo colombiano y de la institucionalidad burguesa. Esta situación ha puesto el límite a la salida reformista del progresismo, comprobando nuevamente que la única posibilidad de consolidar transformaciones estructurales es por la vía revolucionaria. Así, la primavera progresista en Colombia camina rumbo a transformarse en un frio invierno.

Frente a la intensidad con la que se expresó la larga crisis de la sociedad colombiana durante la coyuntura del 2018-2021, los sectores menos conservadores de la oligarquía, ante su desgaste como fuerza de poder y el fracaso del Gobierno Duque, no tuvieron más alternativa que abrirle paso a un gobierno de contención en cabeza de Gustavo Petro, mediante el cual desactivar los ánimos de la beligerante movilización popular, y al tiempo, canalizar hacia el estéril campo de la institucionalidad colombiana los anhelos de cambio que las masas habían agitado en las calles. Así, el poco aliento reformista de las fuerzas políticas articuladas al Pacto Histórico ha terminado diluido en la mecánica del fraudulento establecimiento colombiano, al cual debieron gran parte de su arribo al poder presidencial.

Sobre los hombros de las fuerzas sociales del pueblo colombiano, avanzó el progresismo y, en parte, asumió su componente más disruptivo animando un programa de reformas mínimas, disfrazadas de transformaciones estructurales, despertó la expectativa y las ilusiones de materializar cambios en las viejas estructuras de poder que han sostenido el régimen de explotación de las clases socialmente dominantes en Colombia.

A casi tres años los resultados de la estrategia progresista, desde el punto de vista de las clases dominadas, no han sido de gran envergadura y muchas de las contradicciones de la sociedad han continuado su rumbo de agudización y mantienen su nivel de ebullición. Lo que termina dejando en la palestra la necesidad de concretar las transformaciones más básicas que requiere la nación colombiana para responder al lamentable estado en

que subsisten las mayorías proletarias; también, el papel que ha cumplido el gobierno progresista en términos de contener y disuadir la potencialidad subversora de las fuerzas sociales ha sido efectivo, jugando a favor de los intereses de la conservación del régimen.

Esta timorata actitud se complementa con el proceso de derechización de la política de la Paz Total, cediendo el Ministerio de Defensa al establecimiento militar y reciclando la vieja estrategia del enemigo interno, al tiempo que se reajusta la guerra combinada paramilitar. En esta lógica, se han expandido de forma cruenta y eficaz las condiciones territoriales para asegurar rentas ilegales y posiciones estratégicas en el relanzamiento de la acumulación capitalista en el país.

Estabilidad relativa y contención de la crisis

En el primer plano se ubica que, si bien el gobierno progresista intentó superar la crisis de acumulación del capitalismo colombiano, su gestión en términos macroeconómicos apenas ha contenido los bajos niveles de crecimiento económico de 0,6% en el 2023 y 1,7% en 2024, mediante la inversión pública y los efectos positivos de los precios internacionales de los productos agropecuarios y minero-energéticos.

En materia de pobreza y desempleo los cambios no han sido considerables, si se contempla que la degradación de las condiciones de vida del proletariado nacional, en las principales ciudades del país y en las zonas rurales más periféricas, fueron un factor de impulso de la inconformidad social. El indicador de pobreza monetaria pasó del 36% de la población total en el 2022 a un 33% en el 2023, con un umbral monetario que no llegó ni al medio millón de pesos por familia. Esto indica que las familias proletarias subsisten con enormes dificultades y la solución a su situación ha sido limitada e insuficiente, dado que 15,6 millones de colombianos subsisten en condiciones de pobreza.

Por otra parte, la tasa de desempleo fue de 9,8% a 2024, lo que representó el paro de 2,5 millones de proletarios que, sumados a los 7,5 millones en condición de subempleo, dan un gran total de 10 millones en condición de precarización aguda. A lo anterior, se tienen que añadir los 7,5 millones que están disponibles como Fuerza Potencial de Trabajo o Ejército de Reserva, permitiéndole al capital desmejorar aún más las condiciones de trabajo y condenar a las penurias de la subsistencia a 17,5 millones de proletarios, con lo cual la limitada política social progresista choca contra las barreras reales del capital.

Recomposición del régimen de dominación oligárquico

La crisis del gobierno se cristaliza en la fractura interna de sus dos facciones de composición, los sectores progresistas y las facciones santistas que representan el establecimiento político y económico. La conducta caníbal de Gustavo Petro expuesta en el televisado Consejo de Ministros, ha ido contra el acumulado progresista más subordinado y leal, en aras de habilitar la transacción burocrática y electoral del régimen de gobierno al liberalismo oligárquico.

Por ello, la crisis progresista se traduce en el giro por derecha que Petro ha liderado desde la cúspide del poder presidencial, marcando el centro de despliegue de la coyuntura electoral, que vira entre la recomposición del bloque de poder, en su facción "liberal santista", y la renovación de las facciones conservadoras, las cuales pueden cabalgar sobre la crisis de legitimidad del proyecto progresista en línea de sus fracasos, escándalos de corrupción y de su ineficiencia burocrática.

Al tiempo, el programa de reformas progresista se ha estancado de forma estructural por el bloqueo institucional que las fuerzas parlamentarias del establecimiento lograron materializar. Esta cuestión se agudizó con la doble negativa de la Ley de presupuesto nacional del 2025 y la propuesta de reforma tributaria del 2024, a lo cual se suma la desvalijada por vía constitucional de la ley de reforma fiscal del 2022.

Lo anterior forzó el ajuste presupuestal haciendo más limitada la enana política social del Gobierno y cerrando el campo de maniobra para concretar los proyectos de inversión territorial planteados en su ruta estratégica del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Intensificación de la guerra

La política de seguridad basada en la estrategia de Paz Total ha llegado a su punto final y la salida de

la crisis de este modelo de contrainsurgencia se ha dado por vía de la combinación de tres factores:

- El posicionamiento del establecimiento militar en el control de todos los asuntos de seguridad del gobierno progresista con el arribo de un militar al Ministerio de Defensa.
- La estrategia de focalización territorial de formas de guerra integral que combinan la acción paramilitar, la captación e instrumentalización de comunidades por vía de la movilización de recursos y la intervención de las instituciones púbicas.
- Declarar al ELN como un enemigo principal del régimen burgués, recurriendo al desprestigio de nuestro estatus político en tanto organización revolucionaria, priorizando las estrategias de fraccionalismo e infiltración, y obstruyendo la agenda pactada para adelantar el debate nacional en torno a la participación de la sociedad y las transformaciones necesarias para la paz.

Lo anterior, deja ver la manera en que el establecimiento militar ha subordinado la acción del gobierno progresista en materia operacional y en los asuntos de negociación, desmovilización y paz. Estos últimos fueron sometidos completamente al esquema doctrinal del desarrollo de la guerra donde ha imperado la conducta del engaño, el fraccionalismo insurgente y la infiltración.

Sin embargo, la salida de la crisis del capital continúa descansando en patrones de acumulación, vinculados a materias primas agrícolas y recursos minero-energéticos los que han configurado y agudizado múltiples escenarios regionales de guerra. Sobre ello se levantan intensas disputas territoriales por áreas estratégicas para la captura de rentas y control por parte de importantes cadenas de valor como la economía del narcotráfico, el oro, el cobre o las tierras raras. Este proceso de guerra y disputa territorial impulsado por la crisis en proceso ha dado vía a la acumulación "subterránea" de capitales y la conformación de empresas tercerizadas de guerra criminal y mercenaria.

A la par, nos encontramos en medio de un proceso de ajuste y rediseño de la guerra contrainsurgente, que el establecimiento realiza a fin de solventar sus problemas operativos y financieros, llevándolos a la implementación de nuevas formas de paramilitarismo con estructuras como el Clan del Golfo y los reductos disidentes de las ex-FARC, en las cuales ha descargado la labor de control territorial de su fuerza regular, permitiéndole conservar su capacidad operativa, mantener la ofensiva militar y sacar adelante formas de acumulación de capital.

Crisis del campo popular

El Bloque Popular y Revolucionario en medio de la crisis del régimen de gobierno tiene oportunidades de juego decisivas. Esto porque, los problemas estructurales que han movilizado la sociedad siguen sin respuestas certeras; además, la estrategia restauradora del orden oligárquico puede experimentar dificultades, en la medida en que cualquier opción afecta los privilegios del capital en función de dar garantías al proletariado, lo cual agudiza la lucha de clases.

Así mismo, la crisis de la apuesta reformista del progresismo da paso a procesos de radicalización que dependen del tipo de acción política que las fuerzas revolucionarias logren impulsar.

Sin embargo, existe el riesgo de un proceso de recomposición de la facción ultra reaccionaria de derecha y con ello de ofensiva orientado al exterminio de las fuerzas populares y sociales de mayor radicalidad, lo que obliga a diseñar una estrategia para contener los posibles embates y desplegar las tareas políticas fundamentales para este periodo.

En otra línea, de persistir en la vía legalista, electorera y reformista, el campo popular corre el riesgo de quedar fragmentado y debilitado ideológicamente y adportas de experimentar un repliegue político y burocrático. Para que lo anterior no suceda corresponde dedicar esfuerzos a la unificación de fuerzas del campo popular y la radicalización de su planteamiento programático, de tal manera que pueda transitar del limitado enfoque reformista del progresismo y consolidar condiciones estratégicas para una salida revolucionaria.

EL MOVIMIENTO POPULAR COLOMBIANO EN EL MARCO DEL TEATRO ELECTORAL

El estallido social y el nuevo gobierno

Con el llamado a la movilización por parte de las centrales obreras, el 21 de noviembre de 2019, el estallido social empezó a gestarse en medio del gobierno del oligarca Iván Duque. Fue allí donde el Bloque Popular hizo explicitas sus demandas sociales para solucionar problemas estructurales como el desempleo y la informalidad, la falta de asistencia médica y educativa de calidad, el desamparo estatal con relación a las pensiones, el hambre y la pobreza. De este modo la movilización se tornó nacional y se presentaron nuevas jornadas cada vez más radicales, sobre todo el 5 de abril de 2021, cuando el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República una propuesta de reforma tributaria.

Si el pueblo no confiaba en el Gobierno Nacional, menos en un decadente y corrupto Congreso de la República, donde su mayoría es puesta y controlada por las grandes empresas electorales que están en función del gran capital y los terratenientes, que son sus principales financiadores. En medio de esta desconfianza se midió la correlación de fuerza en nuestra sociedad, en una batalla directa entre la oligarquía colombiana y el bloque popular, que volcado en las calles y tomando las principales vías de la nación y los centros urbanos, paralizó la producción y de paso recordó que la fuerza de trabajo es la única fuente generadora de riqueza. Tal sería la capacidad de la movilización, que el 28 de abril de 2021 el Gobierno retiró su propuesta de reforma, lo que le valió la salida de su esquirol de hacienda el ministro Carrasquilla, el mismo de los sonados *Panamá Papers*.

Con los ánimos encendidos y con los proletarios jóvenes de las grandes ciudades como protagonistas en el Paro Nacional, solo faltaba que las demandas y la movilización se profundizaran para forzar al gran capital a pagar la crisis que había generado. Sin embargo, prevaleció el cálculo electoral de las centrales obreras y del entonces senador *progresista* Gustavo Petro, quienes llamaron a detener los bloqueos para alistarse a las elecciones presidenciales como candidato de la Colombia Humana. De esta manera la movilización se diluyó en mesas sectoriales y territoriales, mientras toda la rapiña electorera del liberalismo de derecha y de "izquierda" se volcaron a las mieles de la mermelada burocrática representada en el presupuesto público.

Vieja estrategia del oportunismo más tradicional de los sectores reformistas, que nunca han dado un paso por la construcción de una Estado Proletario, sino

todo lo contrario, siempre al servicio de la defensa del capital exigiendo participación política, es decir, puestos en la institucionalidad burguesa y el manejo de parte de sus recursos para contener un posible ascenso popular que agudice la contradicción entre capital y trabajo. Después de todo, no se debe olvidar que el progresismo no es más que liberalismo, que plantea la conciliación entre el progreso del aparato productivo bajo la lógica del capital, mientras trata de contener el aumento de las brechas de desigualdad a través de los paliativos redistributivos de la política fiscal.

Una vez que el *progresismo* o *liberalismo*, alcanzó el podio presidencial incluyendo en su programa de gobierno parte de la agenda del estallido social, corrió apresurado hacia la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui para mostrar que Petro era un buen chico capaz de hacer renacer el capitalismo dependiente colombiano, en medio de la efervescencia del movimiento popular. Así, el Pacto Histórico, o el Pacto con la oligarquía, representa el mal menor para el gran capital, en la medida que logró apaciguar los procesos de radicalización del bloque popular y estabilizó la rentabilidad de sus negocios.

Balance del movimiento popular

Para realizar este balance es necesario empezar por los puntos centrales del estallido social, que en su momento más álgido puso en jaque a la oligarquía nacional, ya que para su solución era necesario recortar parte importante de la masa anual de plusvalía, dado que la respuesta real las demandas superaría con creces el Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta confrontación de intereses de clase ha puesto en evidencia que es indispensable avanzar en la materialización de apuestas programáticas como:

- La expropiación y nacionalización de los monopolios y grandes empresas nacionales y extranjeras.
- Impulso a una verdadera Revolución Agraria que afectará la gran propiedad y los latifundios improductivos, en donde las tierras expropiadas pasarán a manos del Estado Proletario quien definirá las políticas para la explotación y distribución.
- La salud del pueblo será un derecho social y su atención debe estar a cargo del Estado Proletario. Por eso en la construcción del socialismo la atención de salud dejará de ser una forma de explotación y enriquecimiento.
- Nacionalización de la educación en los niveles de preescolar, primaria, media y superior. Así, el Gobierno Revolucionario trazará un sistema unido centralizado en su totalidad que garantice la formación de la mujer y el hombre nuevo, integral y socialista.
- Anulación de los compromisos y tratados internacionales que lesionan la soberanía nacional y expulsión de las misiones militares del imperialismo norteamericano.

Como se evidencia, los anteriores puntos lejos de ser resueltos con algunas migajas del Presupuesto Nacional, requieren de la recuperación de la totalidad de la plusvalía fruto del esfuerzo social de proletarios y campesinos. Sin embargo, la izquierda electoral bañada en el *progresismo* consiguió venderse como una salida a la crisis, bajándole el tono a las apuestas más avanzadas del movimiento popular, para incorporarlas en la institucionalidad burguesa con el cuento de pasar de una economía extractiva a una productiva, líneas que se muestran a continuación:

- Renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC's).
- Impulsar el proceso de industrialización para generar aumento en la productividad, el empleo, los ingresos y los encadenamientos productivos.
- Construir alianzas público-populares para superar la informalidad que padece cerca del 60% de los trabajadores urbanos y rurales.
- Garantizar el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía popular.
- Devolverles a los trabajadores formales los recargos nocturnos, las horas extra y continuar con la reducción de la jornada laboral.
- Construir un sistema de salud público y universal a la par que se mantenga la gratuidad en la educación superior.

Con esta propuesta el *progresismo* pudo montarse en el poder ejecutivo, controlar el Presupuesto General de la Nación (PGN) y todo su andamiaje burocrático. En esta lógica, Petro configuró un equipo ministerial con el sector santista, afín a la burguesía financiera, y con algunos liderazgos del movimiento sindical y de los proletarios jóvenes que se movilizaron en las grandes ciudades, de tal forma que los líderes sociales que en otrora dinamizaron la organización popular prontamente se encontraron en los avatares de la vida de la institucionalidad burguesa.

Sin embargo, el romance burgués duro hasta que se empezaron a hundir las reformas en materia de salud, pensiones y laboral en el Congreso de la República, en donde el poder oligárquico envió un mensaje claro, que para el bienestar de los obreros no están dispuestos a ceder ni un milímetro de su abultada plusvalía. Esa misma que han sabido defender sus instituciones parlamentarias y administrativas siempre aderezas con la mano dura de su fuerza militar y paramilitar. Bajo este panorama, surgió una batalla entre el ejecutivo y el legislativo, lo que se trasladaría a las calles en movilizaciones dinamizadas por el movimiento sindical y social.

Prontamente se profundizó la relación de algunos líderes sociales con el gobierno, y la capacidad de movilización se fue diluyendo para convertirse en la cola de su nuevo líder, el *reformista* Gustavo Petro, quien siempre ha insistido en un Pacto Nacional (inter-oligárquico) para salvar al capitalismo mientras le pide al movimiento popular que se movilice, pero bajo los lineamientos de la institucionalidad burguesa. Por su parte, la facción más conservadora del capital, los terratenientes y su mafia narcotraficante, vinieron a disputarse la calle, que antes era un fortín del movimiento popular, con los paros de taxistas y camioneros, a la par que sostiene una alianza con las bandas narco-paramilitares, como el Clan del Golfo y Disidencias de las FARC, por medio de las cuales han asesinado 436 líderes sociales.

Por si fuera poco, con este proceso de cooptación burocrática e inmovilización del movimiento popular, se asistió a la derrota del partido de gobierno en las elecciones territoriales de alcaldes y gobernadores, donde la derecha, representada fundamentalmente en el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador pudo recuperar la Alcaldía de Cali, Medellín, Santa Marta, Bogotá y sostener la de Barranquilla y Bucaramanga. Una de las razones del descalabro electoral del Pacto Histórico se dio alrededor de la disputa interna entre diferentes facciones de la coalición al momento de la definición de las candidaturas y el orden jerárquico de las mismas. De lo anterior se evidencio una tensión entre los sectores progresistas en función de fortalecer sus feudos electorales. Lo anterior, llevo al Gobierno Nacional a cerrar filas con su círculo más cercano y obviamente a una mayor instrumentalización de los liderazgos del movimiento social, siendo este cada vez menos crítico y más alejado de las bases sociales, reduciendo todo tipo de discusión al proceso electoral del 2026, en su nuevo partido único que nacerá de la coalición del Pacto Histórico, cuya agenda persistirá en la línea del fracaso.

Principales retos y proyecciones del movimiento popular

Si bien el Gobierno del Cambio no representa una amenaza para la oligarquía y el imperialismo yanqui, dado que ha estado para canalizar la efervescencia del movimiento popular y garantizar la rentabilidad de los negocios, aun los problemas centrales de la sociedad colombiana se mantienen. De esta manera se debe avanzar en la cohesión política alrededor de un programa proletario y campesino que condense las principales contradicciones contra la burguesía, los terratenientes y el imperialismo norteamericano, a través de la conformación de un *Frente Unido del Pueblo* que comprenda que debe ir más allá del reformismo liberal, dado que la revolución proletaria nunca vendrá de la mano del Estado Burgués.

Claro está que en un país donde el 80% de su población vive en las ciudades, será necesario que la vanguardia del movimiento popular sea el proletariado urbano, ese mismo que se tomó las calles en el 2021 y volvió a llenar de esperanza sobre un cambio profundo a la sociedad colombiana. En este sentido, un reto importante será conectar con las necesidades de los más de 17 millones de obreros urbanos que siguen sin ser organizados en sindicatos y un 56% sufren de informalidad, siendo explotados bajo la lógica deplorable del trabajo a destajo. Así

mismo, el foco de rebeldía urbano será el punto de fortalecimiento de la lucha armada, dado que los explotadores no entregarán el poder de manera pacífica.

Así, se abre una doble disputa, una en las calles a través del fortalecimiento del Frente Unido del Pueblo, que debe seguir profundizando su agenda programática sin dejar que el liberalismo o progresismo lo aparte de su planteamiento estratégico, que es la construcción de una sociedad socialista. Para ello deberá proteger a sus líderes de base, no solo de los ataques de los grupos narcoparamilitares, de la cárcel y el exilio, sino de la cooptación del *progresismo* y el canto de sirenas de la mermelada burocrática, dado que su papel sigue siendo estratégico en la organización y cualificación de la lucha de masas.

Que todo el pueblo colombiano sepa que el movimiento popular en cabeza del proletariado debe derrocar violentamente a la burguesía, destruir el Estado Capitalista e instaurar ***el Estado de la dictadura del proletariado y la democracia de todo el pueblo***. Y que la familia elena sigue firme en el planteamiento marxista leninista de la construcción de una sociedad socialista, apuntando siempre nuestros fusiles a la oligarquía y al imperialismo yanqui, porque solo juntos, en las calles, selvas, sabanas y montañas de Colombia lograremos la victoria final.

PERMANENCIA DE LA LUCHA POPULAR

El movimiento social colombiano experimentó un ascenso significativo tras el estallido social de 2021, que obligó a un giro político y llevó a la elección de un gobierno que prometía transformaciones profundas. Sin embargo, a falta de una agenda clara y una estrategia unificada, el movimiento optó por entregar sus banderas a terceros, apartándose de su ímpetu transformador por una "solución en las urnas".

Este endoso no se tradujo en una alianza táctica que permitiera al proletariado cambiar los destinos de la sociedad. Por el contrario, se consolidó un Pacto Histórico-PH entre el progresismo con la burguesía, a la que le sirvió este acuerdo como oportunidad para mantener el statu quo. Aunque el PH propuso reformas básicas, estas se moderaron, tergiversaron o simplemente no avanzaron, evidenciando una falta de gestión y una limitada capacidad para mejorar la correlación de fuerzas a favor de las clases populares.

A pesar de que Gustavo Petro asumió la presidencia, su capacidad de acción ha estado restringida por los intereses de la burguesía. Las reformas importantes se estancaron en el Senado, y los ministerios clave siguieron en manos de sectores tradicionales o conservadores. Además, sectores de “izquierda” han caído en prácticas autolimitantes como el oportunismo, el espontaneísmo político que explican la ausencia programática y unitaria capaces de orientar procesos organizativos emancipatorios. Predomina un mesianismo liberal que no responde a las necesidad del proletariado y el pueblo colombiano, mientras que el gobierno prioriza acuerdos con la burguesía, relega al proletariado, que queda atrapado por la cooptación de sus dirigentes, careciendo de una estrategia clara para levantar cabeza y radicalizar las exigencias.

Sin embargo, mientras parte de la “izquierda” permanece en el embeleso de la institución, el pueblo por su parte continuó en su batallar reivindicativo demostrando que en la práctica la realidad no ha cambiado.

Según el Observatorio de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2024, se registraron 5,208 conflictos sociales en 618 municipios. Los mecanismos de protesta más utilizados fueron los bloqueos de vías, los plantones y las marchas. Estos conflictos, que dan una radiografía de las necesidades por resolver, se relacionaron principalmente con la tierra, la inversión estatal, la minería, los hidrocarburos y los derechos de las comunidades.

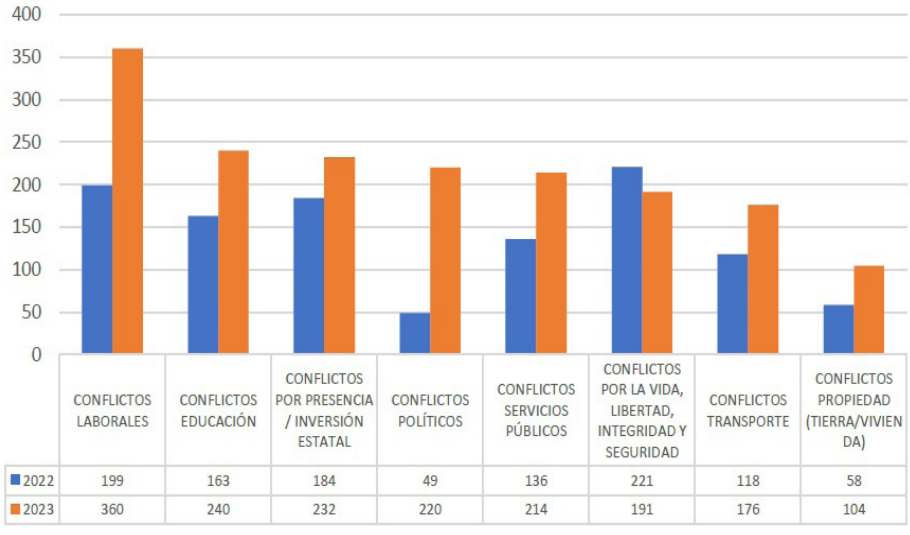
En Santander, las comunidades campesinas aledañas a los páramos del Almorzadero, Santurbán y Berlín protestaron contra la Ley de Páramos y posibles desalojos, logrando acuerdos mediante mesas de diálogo con el Gobierno. En La Mojana, las

inundaciones causadas por el río Cauca afectaron gravemente a las comunidades, que exigieron mayores medidas de prevención y mitigación. Además, en Caquetá, un conflicto con la petrolera Emerald Energy resultó en la muerte de un policía y un campesino, mientras que, en Puerto Gaitán, campesinos bloquearon vías para exigir mayor inversión en infraestructura vial.

En el sector minero, se registraron protestas significativas. En el Bajo Cauca- Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba, los mineros realizaron un paro de 33 días contra la destrucción de maquinaria por la minería ilegal. En San Roque-Antioquia, y San Pablo de Borbur -Boyacá, las comunidades mineras tradicionales protestaron por la falta de formalización y participación en la explotación minera, enfrentándose a empresas como Gramalote y Fura Gems. Asimismo, en el Valle del Cauca, indígenas de ORIVAC y ACIVA-RP solicitaron al Gobierno un decreto para establecer un diálogo directo y vinculante sobre acuerdos incumplidos, mientras que, en Mocoa Putumayo, los damnificados de la avalancha de 2017 bloquearon vías exigiendo la construcción y entrega de viviendas.

Otros conflictos destacados incluyeron protestas en el Urabá Antioqueño por el mal estado de la vía Arboletes-Mulatos, un paro cívico en Arauca debido a las afectaciones por la temporada de lluvias, y bloqueos en Facatativá Cundinamarca, donde trabajadores y comunidades exigieron mejoras laborales, sociales y ambientales a Ecopetrol. En Saravena Arauca, las comunidades protestaron contra la petrolera Parex por temas ambientales, laborales y de inversión social. Finalmente, en la Vía al Llano, comunidades, comerciantes y transportadores manifestaron su descontento por los cierres de la vía debido a derrumbes y obras, exigiendo el cumplimiento de acuerdos por parte del Estado y la concesionaria Coviandina.

Gráfica 4. Principales tipos de conflictos sociales manifiestos (2022 y 2023)

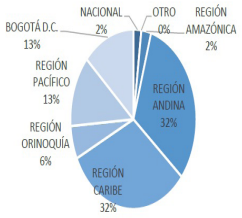


Fuente datos: Defensorías regionales Defensoría del Pueblo, medios de comunicación masiva.
Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo.
Datos sujetos a modificación por actualización de la base de datos.

Los departamentos con mayor número de eventos fueron Antioquia (7 %), Bolívar (6 %), Santander (6 %), Valle del Cauca (6 %), Magdalena (5 %), Atlántico (5 %), La Guajira (5 %), Córdoba (5 %), Cauca (4 %), Norte de Santander (4 %), Meta (4 %) y Tolima (4 %). Los mecanismos de protesta más utilizados fueron los bloqueos de vías (38 %), plantones (33 %), marchas (11 %), disturbios (6 %), paros o ceses de actividades (5 %) y toma de instalaciones (3

y marchas, siendo más pronunciadas en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

Gráfica 2. Conflictos manifiestos en 2023, por regiones



Fuente datos: Defensorías regionales, medios de comunicación masiva.
Procesado: Observatorio de Conflictividad Social, Defensoría del Pueblo.
Datos sujetos a modificación por actualización de la base de datos

Por otra parte, también se presentaron movilizaciones a nivel nacional, aunque en muchos casos descoordinadas de los contextos y luchas locales. En este campo es posible distinguir tres grandes escenarios de movilización que tuvieron impacto nacional. Por un lado, las manifestaciones gremiales de empresarios, que incluyeron paros de camioneros y taxistas, marchas reaccionarias de derecha, impulsadas por exmilitares, retirados de la policía y organizaciones que se oponen a las propuestas de reforma agraria y reparación a las víctimas de crímenes de Estado. Muchas de estas movilizaciones incluso exigieron la renuncia de Petro a la Presidencia o ambientaron escenarios de golpe blando. Adicionalmente impulsaron protestas contra el alza de los combustibles, banderas antes de la clase popular ahora enarboladas la derecha recalcitrante.

Un segundo escenario fue impulsado por el conocido "Comité de Paro", que mutó hacia la Coordinadora Nacional por los Cambios, sumando a otras organizaciones sociales y populares de carácter nacional. Este escenario llevó a las centrales obreras y procesos organizativos a las calles, en respaldo irrestricto a las reformas y a la figura del presidente, ejerciendo una solidaridad de cuerpo, en muchos casos acrítica del proyecto progresista.

Un tercer escenario fue protagonizado por organizaciones sociales y populares de carácter nacional, quienes, empujadas por las masas organizadas en las regiones, coordinaron acciones de movilización exigiendo el desmonte del paramilitarismo y el cumplimiento de acuerdos de las diversas mesas de concertación.

Ante cada uno de estos escenarios, el gobierno de Petro actuó de manera diferenciada. Con las movilizaciones gremiales como la de los camioneros, buscó generar división entre patrones y obreros, abriendo espacios de diálogo que permitieran la presencia de los trabajadores, no solo de los líderes gremiales. Sin embargo, este intento de vocación proletaria no surtió efecto, ya que, en términos reales, se terminó favoreciendo a los gremios al ceder ante sus pretensiones.

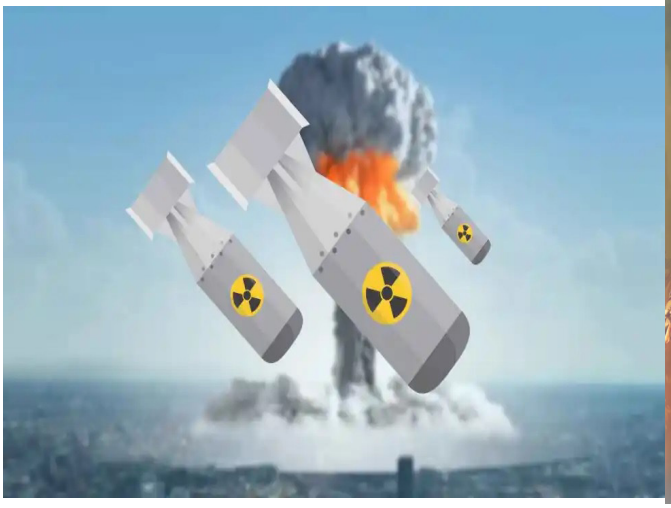
En el escenario progobierno, el ejecutivo se concentró en generar condiciones logísticas y de funcionamiento para sostener la articulación entre las centrales obreras, convirtiendo cada movilización en una tarima para responder a la oposición, agitar el sentir popular y alimentar la figura del caudillo con retórica populista. Sin embargo, estas acciones no fueron más allá de actos protocolarios, caracterizados por la tibieza y la contradicción entre el rechazo al régimen político y el afán por perfeccionarlo y legitimarlo.

Finalmente, con las comunidades organizadas en las regiones, la respuesta no fue muy diferente a la de gobiernos pasados en términos de soluciones reales. Aunque la represión violenta no fue la regla, la persecución judicial, el perfilamiento y las tácticas dilatorias hicieron gala, dejando las promesas incumplidas y los procesos de cambio en manos de funcionarios tecnócratas que ralentizaron cualquier avance significativo.

En este contexto, el proletariado debe hacer una profunda reflexión sobre su papel y sus decisiones. El endoso de sus banderas a un gobierno que prometía transformaciones pero que terminó aliado con la burguesía, fue un error estratégico que lo alejó de la ruta por cambios estructurales.

La larga crisis económica se mantiene, por ello las banderas del pueblo siguen izadas en las calles. **Y este resultado evidencia que los intentos por salir de la crisis han fracasado tanto por derecha como por vía progresista**. Es necesario que la clase popular asuma su responsabilidad histórica y reconozca que la verdadera victoria no se alcanza en las urnas, sino en la construcción de una lucha revolucionaria. Esto implica retomar el trabajo político organizativo con las masas, construir liderazgos colectivos y cuadros políticos integrales, y avanzar en una estrategia unificada que construya alternativas frente a los problemas estructurales del país, orientado su acción al socialismo.

IA Y TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL CAMPO DE LA GUERRA



Desde la irrupción del modo de producción capitalista la actividad de la guerra se ha tornado más letal y extendida a medida que se producen los cambios sociales y tecnológicos. Ejemplos clásicos son el uso de la nación y sus recursos desde las guerras napoleónicas, el salto en movilidad desde la caballería a los carros de combate, la aviación y el uso de submarinos, o el desarrollo de la bomba atómica y de hidrógeno que dio paso al paradigma de mutua destrucción asegurada en la Guerra Fría. En esa misma tendencia asistimos a sus transformaciones ante el uso de la Inteligencia Artificial-IA y la robótica, cambio del que apenas asoman sus primeros efectos y razón que motiva la presente indagación sobre sus tendencias.

Para comprender el significado de la IA es importante tener presente que la reproducción de las sociedades descansa en su interacción con el entorno físico, relación que se facilita mediante la interposición de medios que reducen el gasto del cuerpo humano o potencien sus capacidades. La estandarización en el uso de esos medios es lo que en forma común se conoce como *tecnologías*, que no es otra cosa que procedimientos para hacer las cosas, por eso mismo pueden ser sintetizados en un *algoritmo*, esto es, un conjunto de instrucciones que al repetirse bajo las mismas condiciones producirá iguales o similares efectos. Por ejemplo, cuando se explica cómo hacer un surco para aprovechar mejor las potencias de la tierra, en ese acto se está transmitiendo un tipo de tecnología, que ha sido resumida en una fórmula o *código para su* uso.

En esa misma dirección, en principio, la IA se trata de un tipo de *algoritmo* que procesa información y generara unos resultados programados, los que mejoran a medida que se les suministre información más adecuada (IA computacional y perceptiva). Además, pueden detectar los patrones de relacionamiento en un amplio conjunto de datos (IA cognitiva), pudiendo ahora mejorar su propia programación o incluso generar nuevos algoritmos en forma autónoma. Es decir, que la sociedad se orienta hacia un punto donde esta tecnología sería capaz de autoproducir nueva información y tecnología.

También es importante tener en cuenta que la sociedad capitalista se caracteriza por la *incertidumbre* en tanto las decisiones fundamentales para su reproducción se toman en forma individual, descentralizada e independiente. Esto causa que sea una sociedad regida por las descontroladas fuerzas generadas en las incontables acciones y reacciones individuales, las que se traducen en la guerra irrefrenable del comercio y moldean la vida política sin que exista institución capaz de modularla, siendo

su resultado frecuente las severas crisis sociales y los subsecuentes enfrentamientos militares. Esas relaciones generan la imperiosa necesidad, hasta la obsesión, de procesar información a fin de reducir la incertidumbre y sus efectos violentos.

La aparente resolución de esa necesidad ha conducido a que la interacción humana cotidiana sea subsumida en las redes sociales y resulte provechosa para entrenar las aplicaciones de la IA. Es decir, los conocimientos milenariamente acumulados y las actividades diarias, gustos, relaciones, anhelos, ingresos, pagos, compras, deudas, y hasta las opiniones resultan capturados como información que se deposita en *centros de datos*, que son propiedad privada de las grandes tecnológicas. De esa manera, la información procesada puede ser vendida como producto.

En este sentido, la mezcla de *centros de datos, redes de comunicación, aplicaciones y desarrollo de IA* son un medio que ayuda a reducir la incertidumbre y mejora la efectividad en la toma de decisiones de los centros de poder. Su uso totalmente privado se justifica mediante el argumento de que se respeta la supuesta *soberanía y libertad que goza cada individuo para realizar sus elecciones*, cuando en realidad se están fortaleciendo los medios de control social en manos de los magnates capitalistas y sus Estados, condiciones que han venido a reforzar el desarrollo de actividades militares sobre áreas sociales no militares, dando lugar a conceptos como *estrategias de guerra hibrida, irrestricta o sin límites*. Esta realidad queda puesta de presente en la decisión del Estado norteamericano de prohibir Tik Tok ante la posibilidad de que el capital y el gobierno chino capturen datos y amenacen su seguridad, eso sí, guardando a la vez silencio sobre las aplicaciones que ellos dominan.

En parte, estos cambios se relacionan con la última etapa de la Guerra Fría, en especial con Reagan y su Guerra de las Galaxias, en la que la competencia por el dominio del espacio exterior y la microelectrónica se tornaron vitales para la generación de ventajas operacionales y estratégicas. De ese periodo se derivan el desarrollo de la micro-cumputarización y las redes de comunicación como el internet, los que fueron popularizados por la industria privada a fines del siglo XX. A diferencia, en ese momento, los primeros avances de la IA se vieron hundidos para rebrotar tan sólo hace menos de una década, corto periodo que ha sido suficiente para lograr el enorme salto de la *IA computacional a la IA generativa*, al desarrollarse algoritmos con capacidad de procesar lenguaje ordinario, textos e imágenes.

Con la Revolución en los asuntos Militares-RMA de los ochenta, se esperó que los nuevos medios tecnológicos propiciaran ventajas estratégicas y redujeran al mínimo la actuación directa de las tropas. Las cosas parecieron desarrollarse en esa dirección en las dos invasiones sobre Irak (1991-1999), donde el tipo de *guerra irrestricta* combinó una campaña mediática de desprestigio que aisló y debilitó al objetivo, siendo luego sometido a intensos bombardeos aéreos y navales, de modo que las tropas terrestres sólo actuaron cuando el contrincante estaba sin capacidad de respuesta. No obstante, el escenario de Afganistán mostró que el modelo de guerra tecnológica presenta serias limitaciones frente a ejércitos localizados en terrenos difíciles, con menor acceso a medios tecnológicos y obligados a usar modalidades de guerra irregular.

Estas mismas limitaciones son las que se tratan de superar mediante la búsqueda de medios que permitan combinar y coordinar en tiempo real todas las capacidades de los componentes de fuerzas. Lo que en principio implicaba dominar el espacio aéreo al integrar las capacidades satelitales, de aviación, el uso de drones, se complementa ahora con los ejércitos navales y terrestres dotados de nuevas armas tanto de reconocimiento y combate. Se busca entonces facilitar la conducción de la guerra con la asistencia de IA al permitir un mejor conocimiento de las capacidades del enemigo y contextualizar sus respuestas, facilitando simulaciones ex-ante, elevar sugerencias y permitir ajustes en los diversos planes, en resumen, *alcanzar una especie de mando omnipresente*. Ejemplo es el proyecto del *Sistema Strelets* de Rusia que se propone interconectar estratégicamente todos los componentes y sistemas de armas, esto es, desde un soldado hasta el mismo despliegue y lanzamiento de misiles nucleares.

En ese propósito resulta fundamental la captura, centralización y procesamiento de todo tipo de

datos –militares y no militares- que deben derivar en informes permanentes sobre la situación propia y del enemigo, con el fin de incrementar la adaptabilidad de las capacidades operacionales y estratégicas a fin de reducir los factores de incertidumbre y mejorar los resultados, requiriéndose de procesos automatizados para valorar, aprender, predecir, decidir y adaptarse automáticamente a los cambios identificados, tendencia cuyo límite superior sería una operatividad militar que no requeriría de una orden humana explícita a cada paso y momento.

En resumen, la IA permite realizar análisis predictivos que facilitan la toma de decisiones, pero además cuando actúa en sinergia con la robótica permite el desarrollo de armas que pueden actuar bajo control humano, su supervisión o sin él, esto es, actuar autónomamente en el ataque de objetivos, según su programación.

La implementación de esas posibilidades tecnológicas depende de la captura de información en el terreno –sensores, cámaras, acceso a centros IP, grandes bases de datos y redes informáticas- a fin de acelerar el entrenamiento de los algoritmos. Y aquí reside una de sus limitaciones más importantes, porque la información disponible y relevante para el ámbito militar, en especial en lo que respecta a batallas y combates, aun son muy limitadas. Por tanto, *la captura de información* se convierte, con mayor razón, en un centro neurálgico en el desarrollo de la guerra, condición vital para el avance de soportes en la dirección de operaciones.

En consecuencia, el uso de las redes, centros de datos y el procesamiento por medio de IA con fines militares juega un papel fundamental en el desarrollo de *estrategias no convencionales con fines militares*, que se implementan sobre *todas las relaciones y áreas de la sociedad*. En general se trata de una extensión de la guerra hibrida y sus operaciones sicológicas dirigidas contra la población no militar por medio de la captura y uso de información mediante medios "convencionales y no convencionales" en procura de caracterizar para luego afectar su percepción y comportamiento con el fin de aislar, debilitar y crear vulnerabilidades en la moral y capacidad de combate del enemigo. Este tipo de estrategias de *ataque indirecto* (o de interferencia) explotan las fisuras y contradicciones al interior y entre organizaciones o fracciones sociales, para crear escenarios políticos disruptivos que conduzcan al colapso de los enemigos, de modo que el objetivo se pueda lograr sin necesidad de entrar en combate.

El uso militar de la actual mezcla tecnológica permite incrementar el procesamiento de información y reducir la incertidumbre respecto de enemigos con menor dotación tecnológica. Con esto, se amplía el rango de profundidad con el que los centros de mando pueden dirigir sus operaciones, reduciendo los costos en vidas humanas para sus propias tropas a medida que se incrementa el número de armas robotizadas. Sin embargo, de allí no se deriva una reducción en el número de bajas o la destrucción sobre las infraestructuras de la población adyacente. De esto son prueba los más de sesenta mil asesinatos en la reciente invasión y genocidio en Palestina y las más de 330 mil viviendas destruidas o dañadas, para un total del 90% de las que existían (datos al 15 de enero), como también son alarmantes las bajas en la guerra proxi Rusia-Ucrania, donde se estiman en varios cientos de miles.

Es importante considerar que a medida que las tecnologías se desarrollan también crece su difusión y con ello se recrean las condiciones para ampliar las innovaciones, lo que torna creciente la necesidad de cambio. De esa manera la competencia entre los ejércitos tiende a centrarse en la creación de ventajas tecnológicas que a la larga son cada vez más difíciles y costosas, de modo que la emulación termina por afectar la impredecibilidad y por tanto la capacidad de generar condiciones para la sorpresa. Esta senda de respuestas ayuda a explicar el creciente costo monetario en el funcionamiento de los ejércitos, en tanto, la tecnología y sus componentes son de alto costo, siendo algunos de un solo uso, y el personal militar requerido demanda altísima calificación, condición que pesa sobre los presupuestos de los gobiernos y con frecuencia termina por afectar su legitimidad.

A pesar de los avances, es posible entender que en el futuro inmediato persistirá una sobreposición entre los viejos métodos operativos y las novedades tecnológicas y tácticas. Tal condición se aprecia con

facilidad en el escenario proxy Rusia-Ucrania, donde las tropas en tierra son apoyadas con operaciones de mediana y alta tecnología y estrategias no militares –guerra comercial, diplomática, mediática, operaciones comando de tipo terrorista- que se hace converger al objetivo de la victoria. De ese mismo modo, se destaca nuevamente que la superioridad tecnológica y militar en el campo de batalla no es garantía de las condiciones de victoria, en tanto los factores de fuerza moral continúan siendo vitales en el desarrollo de la guerra.

Y, es precisamente allí donde se puede ubicar la actual estrategia de la ultraderecha, encabezada por Trump, dirigida a remover, alentar y coordinar las fuerzas de toda su nación. Por eso, acaba de revocar la orden ejecutiva de 2023 mediante la cual su antecesor buscó regular el desarrollo de la IA a través de imponerle a las empresas que divulgaran los resultados de sus pruebas y entregaran más información al gobierno. Decisión que está en la misma dirección de la política que trazó a inicios de 2019, dirigida a que los EEUU se convirtiesen en el líder mundial de IA con fines de seguridad nacional.

Esta estrategia ahora se traduce en su actual *iniciativa Stargate* (22-01-25), mediante la cual se teje una alianza entre Open IA, Oracle Softbank y el fondo soberano Abu Dhabi MGX, y que tiene como socios tecnológicos Arm, Nvidia, Microsfot y xAI Musk. Con ella se pretende alcanzar una inversión multimillonaria de hasta 500 mil millones de dólares en IA, acompañada de facilidades para la construcción de grandes centros de datos y fuentes de energía –seguramente de tipo nuclear. De esa manera brota *el contenido real de la alianza estratégica entre la alta finanza, las grandes corporaciones y la ultraderecha* en su propósito de sostener la ventaja tanto económica como militar frente al capital chino. Esta competencia titánica se libra en la certeza de que ***quien concentra la información tiene en su mano la llave moderna para ser el centro de mando de la dominación capitalista mundial.***

Y desde esta perspectiva, las condiciones para un cambio en el centro de mando del capitalismo mundial hacia China presentan importantes limitaciones, muy a pesar de que el capital chino ha dado grandes saltos en el posicionamiento productivo y comercial en el mundo. Esto se debe a que en el campo militar tiene desventajas porque los EEUU tienen como acceder a información operacional a través de sus 904 bases militares diseminadas en el planeta, mientras China apenas cuenta con solo tres, desventaja que le impide acceder a datos fiables sobre el desenvolvimiento real de los escenarios de guerra, mientras los norteamericanos tienen la posibilidad de aprender y entrenar sus IA mediante su presencia en escenarios como Ucrania, Palestina, Afganistán, o en guerras como la que se libra en Colombia.

A ello, se debe sumar que el capital norteamericano tiene el 45% de los centros de datos del mundo, mientras el capital chino solo el 3,4%. Esta condición general crea cierta desprotección al capital chino invertido inteligentemente en su red mundial de puertos, en tanto no contaría con las capacidades militares inmediatas para proteger sus inversiones y ventajas comerciales, tal como acaba de suceder con el pulso de Trump sobre el Canal de Panamá.

En todo esto, hay que resaltar que en el mismo momento en que Trump lanzaba su gran iniciativa –Stargate- el capital chino fue capaz de desinflarla con la simple punta de un alfiler de 25 millones de dólares. Nos referimos a cómo una pequeña startup desarrolló la aplicación *Deep-Seek*, mucho más veloz y eficaz que Chat-GPT, con un costo irrisorio al optimizar el algoritmo de procesamiento, código que además fue socializado al mundo por las redes. En la semana siguiente agregó, en el show de inicio al Festival de Primavera, una exhibición de robots humanoides danzantes que maravillaron con su destreza y articulación, señalando su gran avance en la robotización, sumando el anuncio de un centro para entrenar mil unidades de ese tipo para la producción.

La respuesta desde los EEUU ha sido prohibir el uso de Deep-Seek, en especial en sus fuerzas militares y promover propaganda de que una empresa privada creará en el próximo lustro cien mil robots humanoides, pero con fines militares. Seguramente, justo ahora podremos elevar dudas sobre qué tan ciertos son estos avances, pero de lo que no se puede dudar es que todos ellos ilustran con claridad la tendencia sobre la cual se están deslizando las cosas.

DISPUTA INTERIMPERIALISTA Y SALIDA PROLETARIA

"Nunca es más oscuro, más que cuando va a amanecer" Martí

En medio de las ya recurrentes crisis de acumulación de capital se enarbolan salidas que han pretendido oxigenar o evitar el derrumbe de este modelo de muerte y explotación; así, como en 1938 se acuñó y en los setenta se instauró el neoliberalismo como doctrina económica en la pretensión de administrar la crisis, hoy se promueven otras salidas de gestión de la hegemonía mundial del capital tendientes a mantener este modo de producción.

Es así, que hoy se presentan como solución viejas tesis de la gestión de la hegemonía mundial del capital, las cuales se han insertado en la conciencia colectiva de los proletarios como si consistiesen en una alternativa real. Luego de tres décadas de la consolidación de bloque hegemónico unipolar en cabeza de EE.UU. debido a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- y la eliminación del polo socialista, en la esfera pública se posicionó el término "multipolaridad". Este concepto fácilmente puede rastrearse en las obras de intelectuales de derecha como David Kampf, Paul Kennedy, Dale Walton y Dilip Hiro. Además, en personalidades políticas y medios influyentes para el capital, por ejemplo, la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, el diario The New York Times y los expresidentes de EE. UU. Joe Biden y Barack Obama.

La conceptualización estuvo enmarcada en la "burbuja inmobiliaria", como llamaron a la crisis de acumulación de capital de 2008. En su momento y ante la premura de solventar las consecuencias derivadas de la crisis, los intelectuales del capital, medios y políticos afirmaron: "*un cierto mundo está naciendo, incluso puede ser llamado multipolar*"; mencionaron el inminente "*surgimiento de un mundo multipolar*", o promovieron la idea de que "*estamos tratando de construir un mundo multipolar"*, e incluso se atrevieron a afirmar que "*apareció un sistema multipolar global*". A la par de estas afirmaciones, se especuló que la consolidación de ese "*mundo multipolar*" tardaría dos décadas, que de ser cierto ya estaríamos inmersos en él.

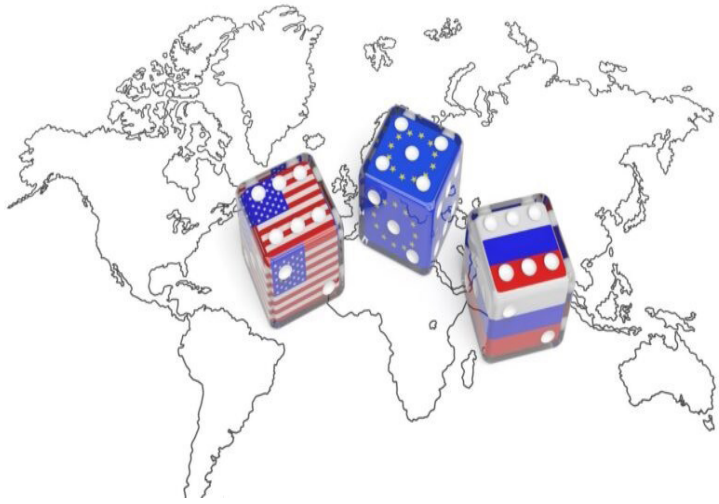
Hay que señalar que el fundamento sobre el cual se cimenta esta pretensión es la *geopolítica*, corriente teórica cuyo concepto central es el Estado-Nación. Esto significa que el sujeto son las naciones organizadas en el marco de un Estado y entre ellas se libra una competencia mediante la cual se disputa

su posicionamiento en referencia al centro de dominio mundial del capitalismo. Al hacer énfasis en la soberanía de la nación, esta corriente burguesa oculta la división y lucha de clases que se sucede al interior de cada país.

Es en el marco de este contexto que aparecieron bloques emergentes y espacios de cooperación entre Estados – Nación, que ante la "posible" pérdida de hegemonía de EEUU y la UE, se orientaron a disputar el centro y control hegemónico del capital. De un lado, en la Federación de Rusia se constituye una burguesía nacionalista que fue capaz de superar la crisis de la década anterior y apalancada con los capitales que fluyeron a su interior, se reposicionaron en el mercado mundial; al mismo tiempo, en el caso de China las dos décadas de flujo de capital externo permitieron una transformación profunda de su estructura productiva, que la convirtieron en el principal productor de manufacturas del mundo. En Latinoamérica el ciclo de altos precios de materias primas (2003-2012) posibilitó que los gobiernos progresistas confluyeran junto a Brasil en la pretensión de ser un actor con autonomía en el mundo.

Es precisamente en el marco de la crisis de 2008-2009, que afectó profundamente al capital de los EEUU y la UE, que estos actores confluyeron para constituirse como bloque en los que se conoce como los BRIC, ahora BRICS+. Ante el cambio de escenarios y fuerzas en el interior de los EEUU, la burguesía empezó a dividirse en dos tendencias sobre cómo gestionar la hegemonía. Una de ellas más ligada al sector financiero propende por sostener un tipo de dominio unipolar mundial y otra, hoy más clara con el gobierno Trump, que promueve una gestión a partir de los nacionalismos, ligado a las grandes tecnológicas y sector manufacturero.

Los efectos de la crisis de 2008-2009 y los subsecuentes reposicionamientos evidenciaron la apertura de un nuevo periodo de lucha interimperialista donde los diferentes bloques disputan el centro de dominio del capital y el modelo de gestión de la hegemonía. Mientras una elite capitalista centra su acción en la guerra como medio para sostener el predomino del capital occidental en todo el mundo, otros como Trump lo gestiona a partir de los ultranacionalismos, mecanismo de coerción y negociación manteniendo la hegemonía mundial, pero permitiendo que otros Estados-Nación jueguen su papel, mientras no amenacen su centralidad. Lo que explica la fácil negociación y posibles acuerdos con Rusia, sobre cómo repartirse Ucrania, y a la vez mantiene una marcada disputa con el Estado y el capital chino; y la exigencia a los capitales norteamericanos de regresar la producción al interior de sus fronteras en aras de solventar sus evidentes debilidades productivas.



Estos cambios en la gestión de la hegemonía mundial del capital han sido interpretados de forma subjetiva por corrientes de la izquierda mundial de tinte liberal y progresista, los cuales, consideran la inminente caída del gran hegemón, y con ello el surgimiento de un nuevo orden ligado a la distribución de la hegemonía en sus diversas formas, lo que consideran benévolo y favorable para que prospere la justicia social. Estas tesis están basadas solo en la aparente fortaleza económica de la suma agregada de los países que conforman los BRICS+, desconociendo que la realidad y prioridades de cada uno de los miembros los hace todavía vulnerables a priorizar las salidas individuales. Ejemplo de ello, son: Rusia y su negociación con EEUU sobre Ucrania; Emiratos Árabes Unidos y su control de la producción del petróleo y la OPEC; la India y su pendulación de relaciones con Rusia y EEUU, o Brasil y su negativa para que Venezuela ingrese al bloque.

La disputa abierta por la hegemonía mundial, se manifiesta a través de guerras proxy propiciando la quema de capital y la repartija de los de territorios para mantener el control estratégico de mercados y materias primas; complementada por las acciones de EEUU con sus guerras comerciales, aranceles y sanciones, y en lo político coercionando a sus aliados para mantener así su hegemonía. Es en el marco de estas disputas que se desarrolla la guerra proxy en Ucrania y el genocidio en Palestina. A su vez, en África se libran ahora guerras que se presentan como "raciales o étnicas", pero que tienen como objeto mantener las posiciones dominantes o de reacomodación del capital.

Las disputas por la hegemonía efectivamente configuran luchas interimperialistas que incrementan las contradicciones del mundo capitalista y en ellas se generan amenazas y oportunidades. Por ejemplo, el crecimiento de la inversión externa de capital chino en Latinoamérica y el apoyo militar ruso a Venezuela, motivarían como respuesta la profundización de la injerencia y control de EEUU sobre las burguesías nacionales. Siendo previsible nuevas acciones para la "protección de los intereses y la seguridad nacional", quienes ven en su patio trasero los recursos (litio, agua, biodiversidad y los recursos mineroenergéticos) necesarios para el relanzamiento del capital. Ejemplo de ello, es la terminación de los contratos con el capital chino y los nuevos acuerdos con Trump sobre el canal de Panamá.

¡La necesaria salida proletaria!

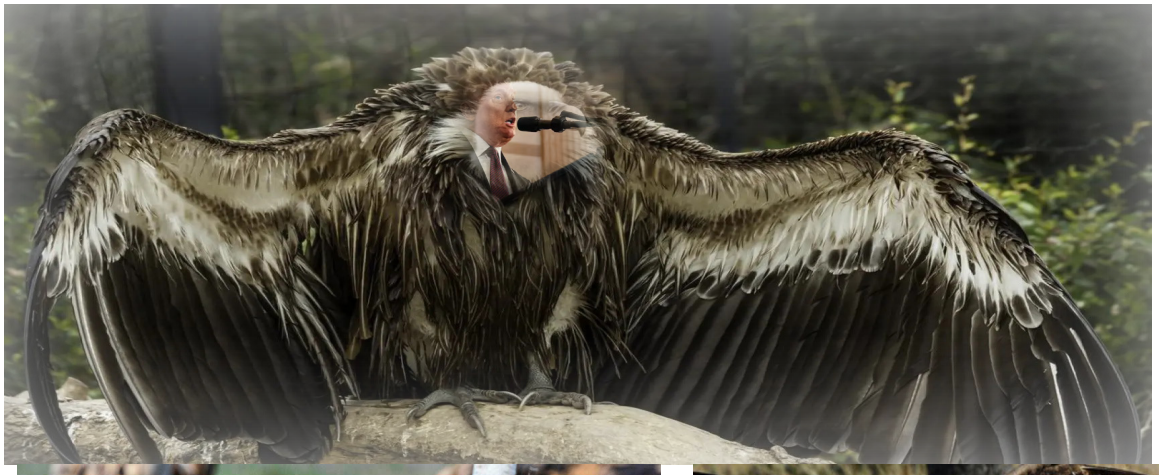
El campo de la lucha interimperialista a los proletarios se nos presenta como una contradicción dialéctica que abre amenazas y oportunidades. En el plano de las amenazas se puede encontrar la idea mistificada de que, los diversos centros del capital, por ser culturalmente diferentes, implicarían otras formas y maneras de organizar la sociedad, perdiéndose de vista que todas ellas están sumergidas en el movimiento mundial de capital, es decir que existe un solo polo, el del capital.

Otro riesgo que podemos evidenciar en los discursos que asumen la multipolaridad, en asocio a las potencialidades de transformación social, radica en la simple postura antiimperialista, que no es en sí misma emancipatoria ni anticapitalista. Lo que se pierde de vista, es que el ***imperialismo es una forma o momento específico del capitalismo***, con lo cual es imposible separar en términos temporales, programáticos o estratégicos la lucha antiimperialista y anticapitalista, llegando en ciertos casos a ser antiproletario. Debiéndose recordar que, cuando así se ha procedido, terminó primando la lucha de liberación nacional para impulsar o restaurar el capitalismo, como sucedió en el caso del Egipto de Nasser, o, en la Libia de Gadaffi.

En medio de la lucha interimperialista se acrecienta la competencia entre capitales, y por tanto las contradicciones entre las burguesías, que seguramente arreciarán contra los trabajadores, empeorando sus condiciones de vida brotando condiciones objetivas para que como decía Lenin, la guerra reaccionaria fuese transformada en guerra revolucionaria por la construcción del socialismo, perspectiva que se mostró correcta en los casos de las revoluciones Rusa, China y Vietnamita.

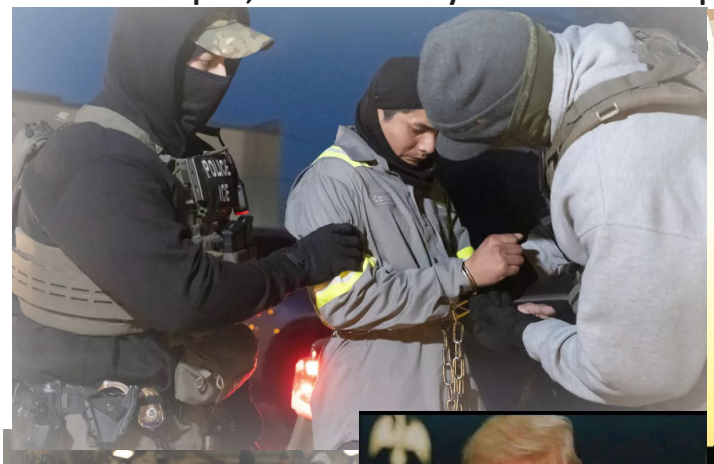
Elon Musk"HEIL HITLER" saludo Nazi, durante la poseción del presidente Trump.

- Voy por América Latina, esas riquezas me pertenecen, le pertenen a los americanos. Aunque para logralo tenga que sacrificar el águila cabeza blanca por el buitre carroñero- Trump



- Sí patrón Trump cómo usted ordene, le haremos caso. Latinoamérica y el mundo le pertenecen, usted es el presente y omnipresente dueño -

Sueño americano: - "Allá te espero" - amigo.
- Fuera de mi país, delincuentes y terroristas - Trump.



Realidad latinoamericana: - "Aquí te espero"

ODIO Y GUERRA CONTRA EL PROLETARIADO

Las tres últimas décadas de América Latina han estado marcadas por el vaivén entre ciclos de gobiernos progresistas y de ultraderecha. Aunque el progresismo ha mantenido el liderazgo del régimen político de algunos países, a su salida se han impuesto versiones de derecha cada vez más agresivas, nacionalistas y organizadas. Hoy, el pueblo latinoamericano se enfrenta a una versión renovada de guerra, comandada por la facción ultrareaccionaria de la burguesía internacional, ante la cual el proyecto progresista está cada vez más deslegitimado como alternativa frente a la crisis del capital.

En el mundo nuevamente se han agitado las banderas del fascismo en contra del proletariado, tal situación es evidente en políticas económicas, de seguridad y sociales con un fuerte tinte nacionalista y autoritario develando la real cara del capital que se distancia cada vez de la hipócrita diplomacia liberal. Este repunte del fascismo se ha expresado de forma distinta en el mundo, en el caso de América Latina su configuración va a estar determinada por la composición aún primario exportadora de los aparatos productivos nacionales, el poco desarrollo manufacturero e industrial de los países y la clara dependencia de los centros imperialistas, en particular de Estados Unidos.

La estrategia de guerra liderada por la gran burguesía internacional tiene un impacto directo en la región a través de las políticas de Donald Trump y su mano derecha Marco Rubio, quién no ha escatimado en tomar medidas económicas para impulsar su agenda proteccionista y vociferar su discurso racista, sexista y clasista. Rápidamente ordenaron cerrar las fronteras, expulsar migrantes, y ejecutar un raponazo sobre el Canal de Panamá, y que el Golfo de México se llamase en adelante Golfo de América, volviendo a la vieja directriz imperialista de ¨América para los americanos¨. Así, la guerra se ha planteado en contra de los latinos pobres que fueron expulsados por el desempleo, de los campesinos cuyos productos dependen cada vez más de los aranceles impuestos y cuyas tierras siguen siendo monopolizadas por la agroindustria, de los millones de trabajadores de las ciudades que pagan los sobrecostos de alimentos importados por los TLC y se ubican cada vez más lejos de condiciones de vida digna, en fin, de millones de proletarios precarizados.

Los frentes de batalla

En el momento actual de la lucha de clases, la burguesía ha consolidado varios frentes de batalla. En primer lugar, se puede ubicar la estrategia de relanzamiento del conservadurismo cultural, una maniobra ideológica que, de la mano de la propaganda fascista y el revisionismo histórico, gana cada vez más adeptos. Esta acción es producida y reproducida tanto por medios tradicionales, como por su nuevo mejor aliado, el ecosistema digital de las redes sociales. La estrategia mediática incluye apelar a un público despolitizado y conectar con él a través de un lenguaje sencillo pero verosímil, presentando una falsa causa de los problemas que aquejan a las mayorías y vendiendo una salida conservadora y retardataria, dónde personajes de ultraderecha aparecen como la solución, Javier Milei y Nayib Bukele, son el mejor ejemplo.

Esto ha implicado la afectación simbólica y política de referentes de los proyectos revolucionarios, y una permanente recreación del relato de que los líderes del progresismo, vendidos como izquierda, han sido los causantes de la crisis actual, razón por la cual, esa supuesta “izquierda” que ha gobernado durante el ciclo progresista, sería la evidencia de que el proyecto socialista no es viable.

Un segundo frente es la guerra jurídica, más conocida como *law fare*, mediante la cual la facción de la burguesía que ha perdido el control del ejecutivo acciona el poder legislativo a su favor como freno

de contención. Ahí son claros los casos de Lula Da Silva quien fue encarcelado por la operación Lava Jato y fue excluido en las elecciones presidenciales de 2018; el de Cristina Fernández de Kichner, con un proceso jurídico abierto por corrupción y otros delitos; y el de Pedro Castillo en Perú destituido en 2022 y posteriormente arrestado.

Con esta estrategia se muestra la trampa del derecho liberal, sustento del capitalismo. Pues los electores de los gobiernos progresistas han quedado desarmados ante la evidencia de que su decisión en las urnas ha sido fácilmente burlada. No hay que olvidar, que el capital actúa como unidad y una vez ha perdido el terreno electoral, saca su rostro jurídico a través del accionar de las cortes, situación que puede ejecutar en tanto las apuestas de transformación se sigan moviendo como fichas de ajedrez en el limitado tablero del estado burgués.

Un tercer flanco son las políticas económicas que profundizan la precarización. En función de la gran burguesía y de sus propios bolsillos, Javier Milei, Daniel Noboa, Dina Boluarte y Nayib Bukele han reducido el gasto público, monopolizando sectores claves de la economía vía privatización, y ejecutado reformas laborales y pensionales que ahorcan a los trabajadores.

Bukele, conocido por sus políticas dictatoriales ha sido reelecto con una aplastante mayoría. Hoy, vende a Trump la opción de alojar deportados en sus megacárceles para seguir ampliando la relación comercial en el sector hotelero, alimenticio y textil, convirtiéndose, desde los ojos imperialistas, en el ejemplo a imitar en la región. Noboa en Ecuador no se queda atrás, se ha mostrado fiel aliado de la política de Trump, disponible para la entrega de sus recursos naturales y abierto a la llegada de tropas extrajeras que materialicen la política de seguridad yanqui.

Por su parte, Boluarte en Perú, ha reactivado la extracción minera y modificado la Ley Forestal para estos propósitos, ampliando la extracción en áreas de bosque amazónico. Cabe mencionar que ha sido reconocida por manipular los indicadores de pobreza que rondan el 30%, y por dar continuidad al puerto más grande de la región financiado con capital chino, construido con el propósito de disminuir el tiempo de transporte de mercancías entre China y Latinoamérica.

Milei, con su política de recorte del gasto público en subsidios y la reducción de ministerios, se alinea con Trump en la gestión privada sobre la pública. El León, que se vendió al electorado como el supuesto verdugo de la casta, se presenta de manera temeraria en la reciente Conferencia de la Acción política Conservadora con una copia de su ya reconocida motosierra como regalo a Elon Musk, mientras las cifras de pobreza económica de la Argentina no paran de crecer rondando el 50%.

La respuesta de los progresismos

Frente a esta arremetida, los gobiernos progresistas de América Latina han cedido rápidamente. Lo primero que se podría decir es que se enfrentan a una derecha más sólida, que se ha dedicado a machacar en la opinión pública los límites y contradicciones de su proyecto, minando la capacidad electoral y de aceptación que en otrora tenían. Allí ha sido fundamental *su limitado papel como administradores de la crisis capitalista*, que lejos de convertirlos en una posibilidad de cambio, los ha alejado del caudal electoral. Su política redistributiva fue frenada, y en lugar de ello, han mantenido casi intacta la propiedad burguesa de los aparatos productivos nacionales. Es así como, cada vez que intentan avanzar en reformas sociales más redistributivas, son rápidamente disciplinados, ya sea por las burguesías nacionales o por el gran capital en cabeza de Trump.

Claudia Sheinbaum mantiene el impulso del Plan México ampliando inversiones por hasta 270.000 millones de dólares, con beneficios principalmente en el sector de tecnología y energía que engrosan las arcas de Carlos Slim. Paralelamente ha creado el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, constituido por el empresariado mexicano y cuya función es la de impulsar una estrategia de relocalización productiva nacionalista, apalancada por los sectores de la burguesía industrial mexicana que se han quedado por fuera de la gran tajada de la inversión extranjera.

Como primer socio comercial de EEUU, y tras la medida adoptada de imposición de aranceles, el gobierno mexicano queda supeditado a esta carga impositiva en función de sus acciones contra el fentanilo y la migración, en consecuencia, Sheinbaum ha tenido que subordinarse bajo la presión y anunciar el despliegue de 10.000 soldados a la frontera para retener a las masas proletarias que intentan pasar el muro.

Sin embargo, más allá de los episodios de cólera de Trump, la relación tenderá a estabilizarse, tanto por la vuelta de timón del partido Morena frente al llamado de atención, como por los intereses que comparte la burguesía mexicana con el gran capital internacional, pues cabe recordar que EEUU compra hoy el 83% de las exportaciones realizadas por México, las cuales son principalmente manufactura automotriz, electrónica, alimentos y muebles, que en su mayoría están articuladas al capital mundial por medio de maquilas.

Lula Da Silva por su parte, sigue ampliando los beneficios para la burguesía brasileña agroexportadora con su nuevo aliado chino, llenando los bolsillos de las constructoras y del sector financiero. Al estar dentro de los BRICS ha hecho esfuerzos por posicionarse en la región como potencia tecnológica, tanto en el desarrollo de inteligencia artificial, como en la digitalización comercial a través de empresas como Nubank y Picpay.

Se podría decir que es el proyecto progresista más distante de Trump, dado que su principal socio comercial e inversor es China, en sectores como energía y minería, agronegocios, infraestructura y transporte y manufactura dan cuenta de su relación con la potencia asiática.

Al respecto es importante tener presente que la Inversión Extranjera Directa china en la región ha disminuido significativamente, y que su participación dentro de las economías latinoamericanas no se puede entender como una alternativa proletaria al imperialismo de EEUU, dado que *al capitalismo no se le puede combatir con un capitalismo de estado, es decir con sus propias armas*.

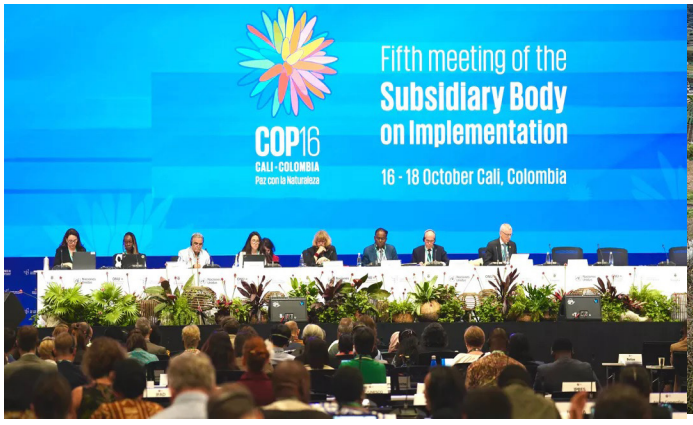
En Colombia, Petro ha reculado rápidamente frente a la presión arancelaria de Trump en función de la dependencia comercial. Hoy EEUU es el primer destinatario de las exportaciones agrícolas del país, donde el café representa el 68% del total. A ello se suma que el 70% de la exportación petrolera tiene destino gringo. Tal situación es determinante frente al mantenimiento de una estructura productiva primario exportadora con poco desarrollo industrial, donde el 68% de los cultivos existentes tiene como base seis productos: café, arroz, palma, maíz, caña y plátano, esto sin contar la producción y exportación ilegal de cocaína.

Ni hablar de Boric quién ha implementado una política fiscal regresiva dada la incapacidad de implementar su programa de gobierno, y al mejor estilo del petrismo, ha dado la espalda a las reformas sociales que exigieron las organizaciones populares en las calles en el 2021. La inversión en educación pública ha sido casi nula, la militarización de la Araucanía dejó en vilo la solución al conflicto de esta región y la reforma pensional, que mantuvo la administración de los recursos por parte de los fondos privados, han sido a favor del orden del estado burgués y sus intereses.

En conclusión, los progresismos, aunque diversos, se alejan cada vez más de la prometida transición hacía una sociedad más justa, la cual solo será posible en el marco de un proyecto de carácter socialista. Queda claro que la altivez de algunos de sus mejores exponentes llega hasta donde el capital gringo o chino se los permite, y que, con su política alineada a favor de las burguesías, fracasa el intento de salida progresista a la crisis, por lo cual se hace necesaria, hoy más que nunca, la construcción de la salida proletaria y campesina.

Ojalá el antiimperialismo y la soberanía popular que sectores de izquierda han enarbolado en medio de la coyuntura, se revierta en la gran tarea de organización del pueblo, pues el odio contra el proletariado se materializa a paso vertiginoso en medidas que deterioran las condiciones de vida de millones, mientras la cortina de humo del progresismo se disipa.

LA COP16: SALVAR EL PLANETA NO ES NEGOCIO



El capitalismo ha alcanzado sus límites históricos y se encuentra en una profunda crisis. La expansión constante y la búsqueda de beneficios sin límites han llevado a agotar estratégicamente las posibilidades de reproducción ampliada de sus relaciones de producción. Esta situación ha desencadenado una serie de consecuencias ambientales, entre ellas, el aumento en la temperatura del planeta tierra y con ello la posibilidad que se extinga la vida como se conoce.

Diferentes facciones del capital abordaron este problema, con el fin de buscar fórmulas para sortear la situación. El debate fue abierto por la fundación Rockefeller junto a la sociedad de Montpelerin un tanque de pensamiento conservador, quienes alertan sobre los límites del crecimiento. Luego, estas tesis van a ser consignadas en el acuerdo de Roma en la década de los sesenta. La crisis energética de mediados de los años setenta con el bloqueo de la OPEP, expondrá la vulnerabilidad y dependencia de los países capitalistas a fuentes energéticas estables, dando contexto a los primeros planteamientos ambientalistas.

En materia de agendas globales, un hito importante fue la Cumbre de Río en 1992, que convocó a cientos de líderes mundiales para revisar temas claves del orden ambiental, que seguida del Acuerdo de Kyoto en 1998 y su ratificación en París en 2015, erigieron un compromiso global y líneas bases para tomar medidas de contención. Estos acuerdos buscaban limitar el aumento de la temperatura global hasta 1,5 grados centígrados, al mismo tiempo que se promovía una transición energética que garantizara la continuidad del proceso productivo capitalista.

En este escenario, la burguesía alemana inició una carrera industrial en búsqueda de fuentes de energía alternativa, innovando en el desarrollo de tecnologías en materia eólica, solar y mareomotriz. Así mismo, el Partido Verde alemán aplicó su programa de transición energética dentro del país y sus homólogos verdes a la Unión Europea, llevando al desmonte de varias centrales nucleares y termoeléctricas, en pro de que las nuevas tecnologías se fueran consolidando. No obstante, sería el gobierno chino, quien asumió la agenda a nivel global y con su capacidad instalada, apalancó la masificación de estas tecnologías.

Sin embargo, la capacidad del capitalismo para adaptarse a estas nuevas fuentes de energía y preservar su dinámica productiva encontró límites. El capital norteamericano se fue rezagando en la competencia por acceder a este mercado, ante su estratégica apuesta por los hidrocarburos, limitado la carrera energética. Además, la transición exige transformaciones profundas en los modelos de producción y consumo de materias primas, lo que generó conflictos entre distintos capitales en la disputa por estos recursos.

Así mismo, persistió una falta de compromisos sólidos en cuanto a la inversión y el seguimiento multilateral efectivo de los acuerdos. En el caso de los países en desarrollo, su aporte en materia de

emisión de gases de efecto invernadero es creciente y la perspectiva muestra como la India, África y América Latina continuaran con el uso intensivo de combustibles fósiles en el mediano plazo.

La victoria de Donald Trump en noviembre pasado profundizó la crisis de la cuestión climática. Su discurso abiertamente negacionista del cambio climático, su énfasis en reactivar la producción petrolera y automotriz, junto a su rechazo al ambientalismo, marcaron un giro en la política estadounidense. Sin pronunciamientos significativos sobre el tema, en su primer mes de gobierno, la crisis climática ha sido desplazada de la agenda gubernamental de Estados Unidos y, como un efecto dominó, ha perdido relevancia gradualmente en el panorama mundial.

La transición energética sigue en marcha, pero ha adquirido el carácter de una disputa comercial y de una guerra ínterimperialista por el control de los recursos necesarios para su desarrollo, en un contexto de cadenas de valor fragmentadas y mercados regionales. Esto contrasta radicalmente con las aspiraciones iniciales, que buscaban una solución global y garantizaban, por lo menos en la teoría, el acceso de los países más pobres a estas tecnologías.

Ante el reflujo de la solución mediante la contención del cambio climático, es clave analizar la situación en la que queda Colombia, especialmente por haber construido en el país una agenda alineada a los temas ambientales y por realizar la COP16 en el último año. Asimismo, resulta clave identificar las características generales del modelo de mercado para mitigar el cambio climático, que finalmente demostró que salvar el planeta no es un buen negocio para los capitalistas.

¿Colombia en búsqueda de ser potencia mundial de la vida?

El capitalismo colombiano atraviesa una crisis prolongada ante la ausencia de una acumulación que le permita expandirse de manera sostenida. Su economía, sigue dependiente de la exportación de materias primas. Esto hace que la acumulación de capital este determinada por los precios internacionales de estos productos, las cuotas de mercado alcanzadas en los mercados mundiales y las condiciones que facilitan el acceso a la renta. Mientras tanto, su sector industrial ha estado orientado principalmente al mercado interno, alejándose de la perspectiva de inversión en transición energética o inteligencia artificial.

En la última década, la fluctuación de los precios y rentas de estos recursos han contraído significativamente la economía, limitando la acumulación de capital y profundizando la crisis social. Frente a este escenario, tanto la burguesía nacional como extranjera han intentado reactivar la acumulación mediante la *especialización territorial y la diversificación de las exportaciones*. Una salida *facilista*, que continúa en su cruzada por vender al mercado mundial materias primas con productividades del trabajo superiores a las del mercado mundial.

Esta dinámica se refleja en las reformas iniciadas por Juan Manuel Santos y continuadas por Gustavo Petro, desde un enfoque liberal y modernizador. Su eje central es la política de paz, concebida como contrainsurgente, territorial, duradera y cuyo hito es la desmovilización de las FARC en 2016, con la que se buscó pacificar el territorio y atraer inversiones en un contexto de post conflicto. Además de estas medidas, era fundamental garantizar la seguridad jurídica de las inversiones mediante el saneamiento del uso y propiedad de la tierra, el principal medio de producción en este modelo. Para ello, se creó una institucionalidad especializada y en 2019 se implementó el catastro multipropósito: sistema de información para la identificación física, jurídica y económica de los predios.

Paralelamente, se impulsaron planes de infraestructura para mejorar las exportaciones y se desarrollaron misiones de ordenamiento territorial, como las de ciudades, la rural y la reciente de descentralización. Sin embargo, tras más de una década de implementación, el modelo de acumulación aún enfrenta dificultades para consolidarse debido a la fragmentación de estas políticas y, sobre todo, a la falta de fondos para concretar proyectos, como la agroindustria en la Altillanura o los mercados de carbono y biodiversidad.

COP 16: una agenda para relanzar el capital o contener su crisis

El gobierno Petro, no titubeó en mantener estas líneas y enfocó su propuesta de gobierno, para desarrollar el capitalismo en Colombia y dotarlo de una naturaleza humana. Por tal razón se esforzó por liderar ciertos debates en torno a la industrialización, el cambio climático y la biodiversidad.

En concreto, sus propuestas son eclécticas e inconsistentes, por ejemplo, planteó, por un lado, que en el país cesaran los procesos de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, mientras las operaciones e inversiones en esta materia se mantuvieron. Algo que también se evidencia en el debate de la transición energética, donde no se propone una iniciativa estructural que promueva la industrialización y la innovación en el país, sino que se renueva la dependencia a estos medios de capital importados y se preocupan más para que en algunos contextos aislados (Costa Caribe y Pacífico) su introducción sea "justa".

Frente al debate de la biodiversidad, el gobierno Petro mantuvo la línea que la doctrina militar introdujo con la operación Artemisa y la participación de las FF.MM en la "protección" de la Amazonía, al sumar a esta estrategia, la ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos y sus helicópteros para su vigilancia. Además, el gobierno afina estas iniciativas, con la celebración a finales del 2024, en la ciudad de Cali, de la conferencia de las partes COP número 16, de la Convención sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional adoptado durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y que refuerza estas estrategias.

La COP16, que tuvo lugar en Cali, del 21 de octubre al 1 de noviembre, se destacó por ser un show que atrajo la atención del país y le permitió un pequeño respiro al gobierno. Durante este evento, representantes de 196 países miembros de la Convención sobre la Diversidad Biológica se congregaron para revisar estrategias de protección de la biodiversidad y evaluar el progreso del Marco Global de Biodiversidad *Kunming-Montreal,* cuyo objetivo principal es revertir la pérdida de diversidad biológica.

Sin embargo, los temas centrales de la cumbre incluyeron la agenda de relanzamiento del capital que Petro viene perfilando: cambiar deuda por protección ambiental. De esta manera, se persiguió a lo largo de la cumbre, la construcción de mecanismos de financiamiento para iniciativas climáticas y de biodiversidad, que, bajo la concepción de la gobernanza, apelaban por la distribución equitativa de los beneficios derivados de la mercantilización de la biodiversidad, en contraprestación de permitir avances tecnológicos en el uso de genes y saberes con el rol crucial de los pueblos indígenas, afros y campesinos como guardianes. Lo que introduce, la visión del capitalismo de las partes interesadas como bases de este modelo.

Sin embargo, un balance deja entrever los pocos alcances que logro el encuentro, a pesar de los intereses que se cernían sobre él. Iniciando porque si bien, las plenarias ratificaron el marco global de biodiversidad como se propuso, no se diseñó la arquitectura financiera que apalancara los programas que necesitan estas iniciativas para implementarse.

Por tanto, el Fondo Cali, apenas fue planteado, pero no recibió recursos. También las organizaciones sociales lamentan, que las apuestas consignadas en la zona verde no fueran vinculantes y tenidas en cuenta en la declaración final.

Así mismo, la recepción del evento por las altas esferas del poder fue mínima, solo llegaron cerca de 10 jefes de Estado de algunos países con poco poder e influencia. Pero quizás la situación más particular, que evidencia la improvisación de la Conferencia, fue el hecho, de que no se pudo culminar por la falta de *quorum* que presentó en la plenaria, cuando la mayoría de delegatarios fueron abandonando la ciudad de Cali durante la madrugada del último día.

Finalmente, cabe resaltar que reactivar la acumulación mediante la especialización territorial y la diversificación de las exportaciones, si bien puede promover la protección de la biodiversidad, como lo orientó el Comando Sur y lo pretendía la COP16, ignora la especialización de otros territorios para la explotación, este es el caso de la Altillanura de la Orinoquia, que aún está en los planes de abrir su frontera agrícola al gran capital a partir de

aplicar la agricultura restaurativa, la gobernanza con las comunidades locales y el desarrollo de la infraestructura. Lo paradójico, es que se invita a rodear el Amazonas y protegerlo, mientras la Orinoquia es vista como un desierto a conquistar, recordando lo sucedido en la pampa húmeda argentina, el cerrado brasilero o el lejano oeste norteamericano.

Salvar el planeta no fue un negocio

La llegada de una perspectiva de derecha y negacionista del cambio climático empantana sin duda, la salida de mercado de las soluciones climáticas que durante una década se erigieron como el gran consenso global a la crisis, luego de lo sucedido, el péndulo tiende al terreno de la carrera extractivista, reproduciendo la dependencia de los países en desarrollo. Una mirada de los resultados de la Conferencia Internacional sobre el cambio climático COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán el año pasado deja el mismo sin sabor.

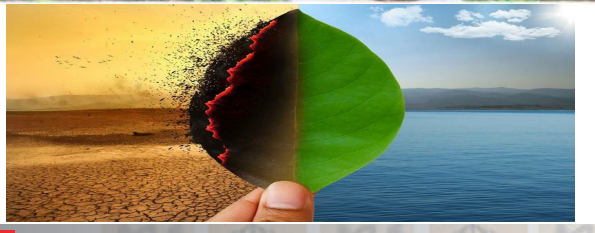
La Conferencia se centró en la búsqueda de la financiación de medidas para mitigar el calentamiento global en países pobres, estableciendo un objetivo de 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035. Sin embargo, sólo se logró acordar 300 mil millones de dólares en subvenciones y préstamos a bajo interés, lo que llevó a calificar el acuerdo final como insuficiente e incluso como una "traición" para los países en desarrollo. Así mismo, quedaron presentes en la jornada, la omisión de un debate sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, a pesar del aumento constante de las emisiones globales de carbono. Además, se observó que las políticas actuales conducirían a un incremento de la temperatura global de 2,7°C, superando ampliamente el límite de 1,5°C fijado en el Acuerdo de París. También examina el impacto del metano, un Gas de Efecto Invernadero- GEI más dañino que el dióxido de carbono a corto plazo, cuyas emisiones han crecido a un ritmo alarmante.

Detrás de esta derrota se encuentra, la poca validez de los modelos económicos convencionales, utilizados para calcular el coste social del carbono, dado que estos estudios omiten riesgos significativos y se basan en tasas de descuento arbitrarias. Asimismo, las soluciones de mercado, como los de carbono, son ineficaces, y lo más particular es que la inversión privada en mitigación climática no resulta rentable para las empresas capitalistas, por ende, aparte del ascenso de la perspectiva conservadora, ya el modelo financiero no pudo desplegarse y dejó en meros compromisos y promesas, las agencias y conferencias globales.

Finalmente, la falta de ambición en los compromisos financieros de las COPs, la persistencia en el uso de combustibles fósiles y las limitaciones de las soluciones de mercado para abordar la crisis climática, fueron las causas principales del colapso de la salida verde.

Esto mismo se puede reproducir en Colombia, donde se abre la posibilidad que la derecha conservadora reabra la matriz minero energética para las exportaciones, no solo de hidrocarburos, sino de minerales y oro a gran escala, contrarrestando los mecanismos institucionales (consulta previa), persiguiendo el movimiento social de oposición a estas medidas y copando los territorios con presencia paramilitar, como lo hizo Boluarte en Perú.

Como alternativa, ante el cambio de perspectiva del capital y su incapacidad para enfrentar la crisis ambiental y posibilitar un destino cierto para la humanidad, es necesaria una respuesta basada en la planificación social. En este caso, en lugar de depender de los precios de mercado, la clave consiste en dirigir los recursos hacia energías renovables. En Colombia, esto pasa por recobrar la soberanía minero-energética, destinando parte del excedente social que hoy se apropia el capital extranjero en el desarrollo de fuerzas productivas basadas en la utilización de energías renovables.



LA CIUDAD IMPRODUCTIVA DE LA BURGUESÍA CRIOLLA

Un reto estratégico para la organización y la lucha revolucionaria

Como es sabido, los procesos de explotación desarrollados en las ciudades son en gran medida los vértices esenciales de la dinámica de acumulación capitalista, ya que concentran extensiva, intensiva y geográficamente la mano de obra y los medios de producción, en contraste con la ruralidad. Esta concentración de fuerzas productivas y de intensificación de la explotación con la incorporación más acelerada de tecnologías dentro de las urbes, se ve condicionada por el papel que ocupan los países en la división internacional del trabajo. Bajo estas circunstancias las ciudades se dotan de estructuras y roles específicos, en la tarea de incorporar, en virtud de los niveles de productividad, las condiciones laborales y de vida de las masas trabajadoras y excedentarias que la habitan.

En nuestro país el ordenamiento y producción de las ciudades está trascendido por un desarrollo desigual. Donde existe una economía que combina una disparidad sumamente marcada entre pocos subsectores económicos que detentan altas tasas de rendimiento, respecto de amplísimos subsectores que poseen una muy baja productividad del trabajo y la incorporación nula o exigua de bienes de capital o tecnológicos.

Las anteriores dimensiones condicionan la estructura productiva nacional, orientándola en los últimos cuarenta años a la preeminencia del sector primario exportador de materias primas y la profundización de una economía urbana anclada al desarrollo del sector terciario, particularmente centrado en la dinámica financiera y bancaria desde los noventa, así como a la profundización y consolidación en los últimos lustros del sector de comercio y servicios formales e informales como espacios nodales de las urbes, centros improductivos de las grandes masas trabajadoras fluctuantes.

En este sentido, el capitalismo en Colombia articula dos dimensiones en su proceso de producción y sustracción de valor, una ruralidad fundamentada en la explotación, el despojo y la extracción, y la precarización y pauperización de la clase trabajadora y excedentaria para el capital en las grandes urbes, donde los sectores improductivos vinculados mayoritariamente a la circulación y la posibilidad de realización de mercancías, que se agregan a un reducido subsector asociado a los procesos logísticos con inversiones importantes de capital, y se complementan con la producción de mercancías vinculadas a la infraestructura con una bajísima productividad.

Estas tendencias mencionadas pueden observarse de manera desagregada. Particularmente la importancia de la producción de las ciudades para la economía nacional se refleja en la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) por parte de Bogotá que aportó para el año 2024 el 25%. De igual manera, la anterior caracterización toma cuerpo si se analiza y compara la distribución por sectores del PIB nacional y el PIB del Distrito Capital, los cuales al tercer trimestre del 2024 muestran una asimetría marcada.

Subsectores agregados	PIB nacional	PIB Bogotá
grícola y pecuaria	7,05%	0,01%
Construcción y actividades inmobiliarias	14,66%	16,97%
Comercio y actividades financieras	29,65%	41,29%
Manufactura	12,32%	7,7%

El dato referente al comercio y las actividades financieras toma relevancia si de los 66,5 billones de pesos que se produjeron en estos sectores agregados, el 58,66% fue aportado exclusivamente por la capital del país, es decir, cerca de las dos terceras partes de estos sectores fueron producidas por Bogotá. En contraste, la actividad industrial ha tenido una fuerte contracción producto de las políticas desindustrializantes y de la apertura económica que llevaron la participación del sector a principio los noventa de un 21,99% del PIB nacional a un 12,32% en la actualidad. Se debe resaltar que la participación de la capital en este importante renglón de la economía bajó 0,79% del 2023 al 2024.

Lo anterior se constata si se revisan las cifras de crecimiento de los sectores, en razón a las variaciones anuales de la producción y las ventas del último año a nivel nacional y de la capital del país. La contracción de la industria manufacturera de Colombia del tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024 fue de 4,2% y estuvo acompañada de una reducción del 38% en las ventas. Por su parte, la contracción de la producción de la manufactura de la capital, en el mismo, periodo fue del 6%, acompañada de una reducción del 6,7% de las ventas. Esta realidad se contrasta con las cifras positivas del sector comercial de Bogotá que, en carta blanca, en su dimensión minorista tuvo un aumento en las ventas de 7,2%, así como un aumento sustancial en la venta de vehículos nuevos de 15,3%.

Esta estructura urbana centrada en la circulación y realización pormenorizada de mercancías nacionales simples y mercancías extranjeras más desarrolladas da cuenta de las dinámicas improductivas. Por una parte, el sector comercio condensa a nivel nacional cerca del 34% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y de la ciudad capital, lo que contrasta con su participación en el PIB a nivel nacional de 19,14% y en Bogotá de 23,3%. Esta diferencia también es visible en sectores intensivos en mano de obra y bajos en composición de capital como el de la construcción, que concentra a nivel Bogotá el 4,88% de la PEA y representa sólo el 3,96% del PIB de la ciudad. Caso contrario es el de los sectores inmobiliario y el sector financiero que, por su naturaleza, poseen una participación proporcionalmente alta en la "producción" con un volumen sumamente reducido de mano de obra.
Es pertinente plantear que el elemento que da un sentido más estructurado a los bajos niveles de productividad descritos, es la existencia de un enmascaramiento de los procesos de precarización y sobre explotación propios de economías con una expansión limitada de la relación salarial y la existencia masificada de actividades productivas desarrolladas por cuenta propia y de rebusque, en sectores descritos como la construcción, el comercio minorista y la gestión de desechos.

Este ejercicio se acompasa y articula de manera transversal con la alta tasa de la mal llamada *informalidad* existente en la economía nacional, la cual, para el último trimestre del 2024 se encontraba a nivel nacional en un 56,6% de la PEA y, en menor medida, pero con un peso sumamente significativo, en la capital del país con un 39,9% según la Cámara de Comercio de Bogotá.

Ahora bien, la pregunta nodal es: ¿quién se beneficia de esta "desorganización funcional" de la economía nacional que pone en la palestra de la explotación y la pauperización a las grandes masas trabajadoras y excedentarias de la urbe? ¿cuáles son las grandes empresas que parasitan la limitada productividad y postran la posibilidad del apalancamiento del desarrollo productivo nacional a la timorata periferia de la circulación y realización de mercancías poco desarrolladas o de origen extranjero?

Para responder estas preguntas se debe entender que dentro de las primeras 50 empresas más grandes del país hay presencia de 38 con registro asociado a la capital. Llama la atención la presencia de empresas que, más allá del registro, desarrollan actividades exclusivamente en Bogotá o que tienen su epicentro operativo y funcional en su mayoría en esta urbe, siendo las siguientes las más relevante

Realizando una revisión de la base de datos sobre las 1000 empresas más grandes del país, pueden establecerse tendencias sobre los tipos de empresas existentes en Bogotá, en función de los macro sectores a las que pertenecen, el volumen de los ingresos operacionales y las ganancias obtenidas con el objetivo de realizar una aproximación a la rentabilidad.

Ranking	Nombre	Macrosector	Ingresos Operacionales (En miles de millones)	Ganancias\Perdidas (En miles de millones)
8	Nueva EPS	Servicios	$14.780	$10
12	Colombiana de comercio	Comercio	$11.140	$340
14	Kopps Commercial	Comercio	$9.660	$880
19	Colombiana	Servicios	$7.860	-$70
25	Salud Total EPS	Servicios	$6.210	$170
33	Cencosud Colombia	Comercio	$4.640	-$10
35	Compensar	Servicios	$4.420	-$130
36	Samsung Colombia	Comercio	$4.340	$ 30
41	Famisanar	servicios	$3.970	-$700
45	Grupo de Energía de Bogotá	servicios	$3.590	$2.850

En ese sentido, un primer elemento que se debe resaltar es que el 53,5% de las grandes empresas del país tienen asiento en Bogotá y Cundinamarca, estando inscritas en la capital el 47,1%, las cuales obtuvieron ingresos operacionales por 757 billones, ganancias por 102 billones y una rentabilidad de 13,49%.

Sí excluimos las 50 empresas más grandes del sector minero y agropecuario que se encuentran inscritas en la capital pero que desarrollan sus procesos productivos en otros territorios como Ecopetrol, El Cerrejón, Drummond, Parex, Sierracol Energy Arauca y Frontera Energy, encontramos una reducción de los ingresos operacionales a 515 billones y ganancias por 42 billones para las empresas de la capital.

Lo anterior en la medida que este sector detenta ingresos operacionales por 241 billones y ganancias por 59 billones con una rentabilidad del 24,77%. En contraste la rentabilidad del sector de construcción es de 12,4%, de comercio y servicios de 8,66% y de la manufactura de un reducido 5,41%.

Estos datos nos confirman de manera concreta la aterradora realidad improductiva de la ciudad, en la que los grandes capitales internacionales se orientan a sectores extractivos, siendo los sectores con menor intensidad de capital y baja productividad, como el comercio y servicios, los que absorben las grandes masas trabajadoras, a partir de la ampliación de la sobre explotación. De igual manera, se evidencia la existencia de un sector manufacturero raquítico con tecnologías obsoletas, con una bajísima productividad y una exigua rentabilidad, así como con una incapacidad generalizada de producir empleos suficientes para el proletariado y la población excedentaria, los cuales se ven obligados a lanzarse a las "economías de subsistencia" fundadas en la realización pormenorizada de mercancías simples y la precarización.

Ante esta situación creada y azuzada por una burguesía permisiva con el capital extranjero y reproductora de la miseria y pauperización social, es fundamental que la clase proletaria de las urbes logre comprender la cruenta situación en la que vive y concrete ejercicios organizativos que superen esta degradante estructura productiva.

Lo anterior a partir de propiciar la movilización y la radicalización de la lucha hacia una acción revolucionaria integral, orientada por una agenda política que tenga como centralidad las grandes transformaciones de las relaciones sociales de producción en una dirección socializante.

PAROS Y BLOQUEOS DE VÍAS COMO ARMA POLÍTICA DE LA ULTRA DERECHA

En el segundo semestre de 2024, el país afrontó las consecuencias de dos paros en las carreteras intermunicipales y departamentales, con las afectaciones de siempre, falta de movilidad de pasajeros que deben cumplir compromisos laborales, educativos y personales, desabastecimiento de alimentos, combustibles y amenaza de encarecimiento de los mismos. La particularidad de estos eventos es que las necesidades y contradicciones sociales fueron manipuladas para fortalecer la agenda de la ultraderecha en el país.

Paro camionero

El primer paro tuvo como objetivo rechazar el incremento en el combustible diésel (acpm), situación que se resolvió en cuatro días, durante los cuales el gobierno llegó a acuerdos con delegados de los diferentes sectores del transporte, empresarios y pequeños transportadores. Pero también permitió develar situaciones un tanto anómalas dentro del sector del transporte en Colombia, caracterizado por una complejidad en su funcionamiento y desconocido para la mayoría del pueblo colombiano.

En este paro se logró identificar y escuchar la voz de los pequeños y medianos empresarios del transporte, principalmente a los trabajadores (conductores) que en su cotidianidad laboral deben enfrentarse a los consorcios y monopolios, poniendo de presente problemáticas y contradicciones latentes entre empresarios y trabajadores.

De un lado se encuentran los pequeños y medianos transportadores quienes manifestaron que en gran proporción el fruto de su trabajo termina convertido en miseria, mientras las ganancias quedan en manos de las empresas que generan el servicio de articulación de carga. En este sector se presenta abuso, atropello y humillación, por ejemplo, los pequeños propietarios y conductores, se ven sometidos a las reglas que imponen quienes lo monopolizan.

Tanto los conductores asalariados como los propietarios conductores deben buscar que les adjudiquen el servicio de transporte, pagando en cambio un porcentaje del flete por esa intermediación, relación en la cual surge la posibilidad de alargar la cadena de comisiones. Además, la empresa descuenta por anticipado el costo de seguros, administración, impuestos, imprevistos y otros ítems de descuentos, que justamente caen sobre las espaldas de quienes deben rodar cientos de kilómetros para ganar un jornal paupérrimo.

Esta situación empeora en la mayoría de los casos, cuando el conductor va a cobrar su pago, este debe enfrentar que las empresas no le paguen a tiempo, a veces hasta después de uno o tres meses en mora, situación que agrava su agotamiento físico y mental por lo vertiginoso del viaje, los factores del clima, el esfuerzo físico propios de la exigencia de la entrega de carga a tiempo en su destino final. Además, ellos mismos deben pagar los aportes a salud y pensión.

No faltan las presiones a las necesidades de los trabajadores del transporte, si les apremia el pago inmediato, deben hacer efectiva la resta adicional del valor del mismo flete llamada “pronto pago”. A pesar que, muchas veces, las empresas de carga facturan y reciben el valor total de los fletes por anticipado retienen los pagos a los transportadores obteniendo las ganancias adicionales por intereses financieros, además obligando a los transportadores a comprar combustibles y lubricantes de las estaciones de servicio automotriz que son de propiedad de los monopolios de carga.

Los opositores al actual gobierno, sectores de extrema derecha con sus paramilitares y algunos medios de comunicación afines, instrumentalizaron

las necesidades de los trabajadores del sector, hecho que motivó al presidente Gustavo Petro a afirmar que detrás de ese movimiento estaban los "uribistas", "golpistas" y "mafias", que pretendían darle un golpe de Estado, frente a los cuales utilizó como cortina de humo el caso del software Pegasus. Esta situación causó rechazo por parte de algunos manifestantes, sin embargo, con las conversaciones en la mesa de negociación, lograron acuerdo en el incremento de manera escalonada hasta finalizar el año 2024, argumentando que este incremento obedece a razones de macroeconomía y estabilidad fiscal.

Paro minero y "paramero"

El otro paro que se dio en el país a finales de octubre, en el marco de la COP16, fue el llamado inicialmente paro campesino de paramunos, finalmente develado como paro minero de la pequeña burguesía rural capitaneado por sus paramilitares, en referencia a los páramos de Santurbán y El Almorzadero en los santanderes, El Cocuy y Pisba en Boyacá, y Amagá en Antioquia.

En Colombia el capital se enclavó en las mejores tierras de cultivo de alimentos, de fácil acceso y facilidades de producción. Por la fuerza se plagaron de monocultivos de explotación extensiva, mientras a los campesinos se le forzó por la vía violenta a ubicarse en las zonas altas de la cordillera, cuyas tierras presentan menor capacidad productiva, accesos más difíciles y vocaciones no necesariamente aptas para la agricultura y minería. Esta contradicción a su vez se manifiesta como desequilibrios ambientales y sociales, que bajo la lógica del capital y las reglas del Estado capitalista pretenden ser zanjadas mediante una nueva expulsión de los campesinos más pobres de los páramos incorporándolos al proceso de proletarización.

Mientras la ganadería potrerizó extensiones de tierra para el engorde de animales de carne de exportación, por su parte la explotación minero-energética en el país, abrió una brecha hacia el fondo de la tierra o a cielo abierto ocasionando la profundización del agua y desecamiento de las superficies ecosistémicas. Se ha vuelto popular decir: cambiaron agua por petróleo, carbón, oro y minerales; cambiaron papa y hortalizas por eucalipto, pino y retamo espinoso, especies invasoras en el país; cambiaron plátano y yuca por teca, palma aceitera y caucho, cambiaron el bosque de vegetación nativa por extensos potreros para que el ganado deambule buscando alimento entre piedras, espinos, bancos de arena y tierra seca, se cambió el cacao y los frutales por cultivos para uso ilícito.

Y en esta historia priman los mecanismos ilegales para legitimar la apropiación privada de la tierra. Quizá algún amigo del amigo de alcaldes y notarios, quienes por unas cuantas cervezas en la tienda de la esquina del parque, palabreó y declaró ser propietario de cientos de hectáreas o fanegadas de tierra paramuna, y al calor de una fría cerveza firmaron documentos de propiedad y con este soporte fueron pasando de mano en mano como dueños que no cesan en su empeño de apropiarse cada vez más.

Los linderos y las cercas se tumban, se corren y se apropian, hasta que se llega al frágil límite de atentar contra la vida de los páramos con sus frailejones y esponjas de agua, con el reto social de defenderla o dejarla fenecer bajo la avaricia de la ganancia capitalista y el poder, ahora dilatada por la burocracia de las leyes, decretos, resoluciones y negociaciones, además empantanadas en cuanta oficina gubernamental llega el paquete que reclama vida paramuna, donde los páramos hablan pero no se escuchan bajo el intenso ruido de la propiedad privada y el capital.

La ultraderecha y sus paramilitares quisieron pescar en rio revuelto, buscando extender la ley de páramos en favor de los intereses del capital, en la minería, agricultura y el ecoturismo, lo que de cumplirse profundizaría los problemas sociales y ambientales. Esta perspectiva es diametralmente opuesta a las propuestas de los actuales habitantes del páramo donde expresan que pueden continuar con sus vidas paramunas y a la vez mejorar sus prácticas en función de recuperar y proteger estos ecosistemas.

¿ paperos...o...mineros?

PATRIMONIO CULTURAL

Es un conjunto de bienes materiales o inmateriales que posee una persona, familia, comunidad, municipio, Departamento, Región, País, Continente o la humanidad; el patrimonio cultural no es propiedad de nadie, pertenece a la humanidad y al paisaje cultural de los pueblos; el principal patrimonio cultural que debe ser digniÞcado es la gente que compone los pueblos y las naciones.

Dicho patrimonio es reconocido y valorado por la humanidad intelectual, después de la segunda guerra mundial, evento que se enmarca en citas como: la Carta de Atenas de 1931, Convenio de la Haya de 1954 y la Comisión Franceschi ni de los años de 1960 eventos de valor jurídico multilateral, que hacen que las naciones del mundo y sobre todo los Estados, se vean obligados a reconocer y respetar al conjunto de bienes, parte del patrimonio cultural.

El patrimonio cultural es tangible e intangible, es decir es material e inmaterial, tangible como: Los Monumentos, Paisajes, Materiales de Archivos físicos, libros, Obras de Arte y Artefactos, Platos Típicos, restos Arqueológicos, Museos etc, intangibles o inmateriales como el Folclore, Bailes, Tradiciones, el Idioma y las lenguas nativas, los cantos de vaquería, el conocimiento científico, ancestral y el milenario, la historia, las creencias; en Þn todo esto es la forma más distintiva de expresión de una cultura, en conclusión entre las Artes como la manera más desarrollada para transformar las realidades y el patrimonio ßorece y se desarrolla la cultura.

Con el patrimonio cultural nadie puede hacer un negocio particular.

Con la identidad de un pueblo no se pueden ni deben hacer negocios.

Es un crimen a la humanidad y a la identidad cultural, convertir el patrimonio de la humanidad en un mercado.

Fabio Vásquez Castaño
Fundador del ELN
Camilo Torres Restrepo
ELN
Domingo Laín Sanz
Manuel Pérez Martínez
Nicolás Rodríguez Bautista